

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 2 INCISO 5 DE LA LEY  
1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA  
LEY 975 DE 2005

ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2013

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 2 INCISO 5 DE LA LEY  
1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA  
LEY 975 DE 2005

ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS

Trabajo de grado para optar el título de  
Abogado

Roberto Jiménez González  
Asesor

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE DERECHO

BARRANQUILLA

2013

**NOTA DE ACEPTACIÓN**

---

---

---

---

---

Firma del Presidente del Jurado

---

Jurado

---

Jurado

Barranquilla, Noviembre 12 de 2013

## DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía, mi fuerza espiritual, en el cual constantemente encuentro alegría, tranquilidad, fortaleza y seguridad en cada instante de vida y en especial de esta etapa que esta próxima a culminar y que es la más importante de mi formación profesional.

A mis hijos Fernando y Julián, por ser mi constante inspiración, el más grande tesoro que Dios me ha regalado.

A José Maldonado, por estar siempre conmigo, demostrándome todo su Cariño y apoyo incondicional.

A mis padres por haberme dado la vida, porque a pesar de todo, sé que este momento es también especial para ellos.

A mi hermosa tía Eme, a quien considero mi segunda Madre, gracias por la crianza dada, por compartir momentos significativos conmigo y por siempre estar dispuesta a escucharme y apoyarme en cualquier circunstancia.

A Ángel Mario, por el amor, apoyo y paciencia que ha tenido, al esperar que cumpliera primero este sueño.

A mis amigas, Ellas, María Mercedes, Jessica, la señora Vilma, por compartir momentos de alegrías y tristezas y demostrarme que siempre podré contar con su apoyo incondicional.

Finalmente deseo dedicarles este trabajo a todas las personas que siempre creyeron en mí, es gratificante saber la fuerza y determinación que poseemos cuando queremos alcanzar algo.

## **AGRADECIMIENTOS**

La autora expresa sus más sinceros agradecimientos A:

Dr. Roberto Jiménez, por toda su Confianza, colaboración, orientación y apoyo en la realización de esta investigación.

A la Dra. Belíña Herrera, por su colaboración y apoyo en la Aprobación de esta investigación y orientación en sus directrices metodológicas.

A todos los docentes que compartieron sus conocimientos, dentro y fuera de clase, haciendo posible mi formación profesional.

A todas las personas que de una u otra forma hicieron posible la realización de este proyecto.

## RESUMEN

En Colombia existen una serie de herramientas para dotar a los ciudadanos de mecanismos efectivos que permitan el amparo de sus derechos fundamentales, de igual forma le ofrece la posibilidad de interponer acción de inconstitucionalidad, de acuerdo al ordenamiento constitucional vigente, para que por medio de esta pueda ejercer la defensa de la supremacía de la constitución, cuando considere que una disposición contradice ésta. La acción pública de inconstitucionalidad es entonces una de las herramientas que irradian un insondable sentido democrático, participativo y deliberativo del orden constitucional vigente.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta investigación Jurídica estuvo en caminata en evaluar si el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, transgrede el derecho fundamental a la igualdad artículo 13 y los derechos y deberes de la familia artículo 42 inciso 4 de la Constitución Política y así poder ejercer el derecho constitucional de la acción pública de inconstitucionalidad a fin de lograr el amparo de la constitución como norma suprema.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se elaboró y posteriormente se presentó el día 27 de Mayo de 2013, ante la secretaria General de la Corte Constitucional, una demanda de Acción de Inconstitucionalidad, siendo esta admitida el día 11 de Junio y publicada en el estado No 080 del 13 de Junio de 2013, la cual aún se encuentra en estudio, para fallo.

**Palabra claves:** Acción pública de inconstitucionalidad, control constitucional, derechos fundamentales.

## ABSTRACT

In Colombia they exist a series of tools to endow the citizens of effective mechanisms that allow the help of their fundamental rights, of equal it forms him he/she offers the possibility to interpose unconstitutionality action, according to the effective constitutional classification, so that by means of this it can exercise the defense of the supremacy of the constitution, when it considers that a disposition contradicts this. The public action of unconstitutionality is then one of the tools that irradiate an unfathomable democratic sense, participativo and deliberative of the effective constitutional order.

According to the previously exposed thing, this Artificial investigation was in having walked in evaluating if the Article 2 Parenthesis 5 of the Law 1592 of December of 2012, 03 modificadorio of the Article 5 of the Law 975 of 2005, it transgresses the fundamental right to the equality I articulate 13 and the rights and duties of the family article 42 parenthesis 4 of the Political Constitution and this way to be able to exercise the constitutional right of the public action of unconstitutionality in order to achieve the help of the constitution like supreme norm.

To give execution to the proposed objectives, it was elaborated and later on the day it was presented May of 2013, 27 before the General secretary of the Constitutional Court, a demand of Action of Unconstitutionality, being this admitted the day June 11 and Not published in the state 080 of June of 2013, 13 which is still in study, for failure.

**Word keys:** Public action of unconstitutionality, constitutional, control, fundamental rights.

## TABLA DE CONTENIDO

	<b>Pág.</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....</b>	<b>11</b>
<b>2. OBJETIVOS.....</b>	<b>15</b>
<b>2.1 OBJETIVO GENERAL.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....</b>	<b>15</b>
<b>3. IMPACTO INTERNO.....</b>	<b>16</b>
<b>4. ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD.....</b>	<b>18</b>
<b>4.1 NORMA QUE SE DEMANDÓ.....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 NORMAS QUE VULNERA EL ARTICULO 2 INCISO 5 DE LA LEY 1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 975 DE 2005.....</b>	<b>45</b>
<b>4.2.1 Definición del artículo 5 de la constitución política y su protección jurisprudencial.....</b>	<b>45</b>
<b>4.2.2 Definición del artículo 13 de la constitución política y su protección jurisprudencial.....</b>	<b>48</b>
<b>4.2.3 Definición del artículo 42 de la constitución política y su protección jurisprudencial.....</b>	<b>70</b>
<b>CONCLUSIÓN.....</b>	<b>87</b>
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>	<b>89</b>



## INTRODUCCIÓN

*“Las leyes tienen por objetivo regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad entre los ciudadanos, el mínimo de derechos, consagrados dentro del mandato constitucional. Por tal razón ninguna norma puede ser contraria a está, la Constitución es Ley de Leyes (Norma Normarum), es la base de la pirámide tal como la define el Jurista Hans Kelsen.”*

El estado colombiano está diseñado, como Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho, en consecuencia la Constitución Política, además de reconocer los derechos y libertades del hombre, establece la participación del pueblo en el manejo del Estado, y brinda a este la facultad de ejercer control constitucional por medio de la acción Publica de inconstitucionalidad, la cual está basada en la protección de la supremacía constitucional, cuando se prevé que una ley o decreto con fuerza de ley, transgrede la Constitución Política, la acción pública de inconstitucionalidad supone la presentación de una demanda, por parte de los ciudadanos, por medio de la cual se inicia un proceso constitucional del cual conoce la Corte Constitucional como órgano encargado del control constitucional.

La finalidad de este proyecto es examinar y analizar el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, con el fin de establecer si vulnera las normas constitucionales como lo son el Artículo 5, el cual define a la familia como una institución, básica de la sociedad, que debe dársele prioridad,

el artículo 13, respecto al derecho fundamental a la igualdad y el artículo 42 inciso 4, de los derechos y deberes de la familia, para lo cual se realizó un análisis jurisprudencial, de los diversos pronunciamientos que ha emitido la corte en defensa de los derechos anteriormente enunciados, que revisten gran importancia en especial por que la vulneración de estos derechos por parte de esta disposición causa una gran afectación a un determinado grupo de personas que son excluidas en la norma acusada en razón de su parentesco, desconociendo sus derechos.

Por las consideraciones anteriores, se instauro ante la Corte Constitucional, la pertinente demanda de acción de inconstitucionalidad, contra la disposición acusada de vulnerar la constitución política de 1991, en aras de que el tribunal constitucional realice el correspondiente control de constitucionalidad y decida si Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005 de la norma demandada es exequible o inexecutable.

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las leyes tienen por objetivo regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad entre los ciudadanos, el mínimo de derechos, consagrados dentro del mandato constitucional. Por tal razón ninguna norma puede ser contraria a ésta, la Constitución es Ley de Leyes (*Norma Normarum*), es la base de la Pirámide tal como la define el Jurista Hans Kelsen.

En tanto, los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se constituye todo el sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma puede estar en contradicción con los principios constitucionales, los derechos fundamentales, son como todas las normas constitucionales emanación de los valores y principios constitucionales (Sentencia T-406/92). En este orden de ideas, el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, el cual a reza:

“Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de

acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley....”

La anterior disposición, infringe varias normas de rango constitucional, al excluir a un determinado grupo de ciudadanos en razón de su parentesco. Es la situación clara de las personas con parentesco civil, respecto a los miembros de la Fuerza Pública, ya que al excluirse se provoca una vulneración no solo del Artículo 13 de la Constitución Política de 1991 que consagra el Derecho a la Igualdad, sino que también transgrede normas que por estar en el denominado Bloque de constitucionalidad se integran a nuestra Carta Política como es el Artículo II de la Declaración Americana de Bogotá, que proclama: “ Todas las Personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración sin distinción de raza , sexo, soberanía , credo ni otra alguna”, en el mismo sentido y por las mismas razones se vulnera, el Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José.

El Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, también resulta violatorio del Artículo 42 Inciso 4 De los Derechos y Deberes de la Familia, referido a la igualdad de los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, ya sean Adoptados o procreados Naturalmente o con asistencia científica, dice “tienen iguales Derechos y Deberes”.

El parentesco Civil lo define el Artículo 50 del Código Civil como aquel que “resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante y el adoptado se encuentran entre sí respectivamente, en las relaciones de padre, madre e hijo.”

Así las cosas, este parentesco, es una ficción legal por la cual se crea una relación entre adoptante y adoptivo, por ello, la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en defensa de esta institución, amparando el derecho a la igualdad y a la familia.

En este orden y teniendo en cuenta la importancia, de estos derechos, lo que se busca es demostrar ante la Corte Constitucional a través de una demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, la vulneración de los Artículos 13 y 42 de la Constitución Política de 1991.

De lo anterior surge el siguiente Interrogante: ¿Debe el artículo 2 Inciso 5 de la ley 1592 del 03 de diciembre de 2012, modificadorio del artículo 5 de la ley 975 de 2005, que vulnera el derecho fundamental a la igualdad artículo 13 y los derechos y deberes de la familia artículo 42 inciso 4 de la Constitución Política seguir vigente en nuestro ordenamiento jurídico?

## **2. OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Evaluar la Inconstitucionalidad, del Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 del 2005, mediante la presentación de una Demanda de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Analizar los vínculos legales que surgen del parentesco.

Determinar sí en realidad el Artículo 2 Inciso 5, de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 del 2005, vulnera los Derechos de Igualdad artículo 13 y Derechos y Deberes de la Familia, Artículo 42 Inciso 4 de la Constitución Política.

Identificar la protección que el Estado Colombiano debe a la familia y a los derechos de las personas en virtud del Principio Constitucional consagrado en el artículo 5 de la Norma de Normas.

Realizar un análisis jurisprudencial respecto la Vulneración del Derecho Fundamental de Igualdad, artículo 13 y los Derechos y Deberes de la Familia, Artículo 42 Inciso 4 de la Constitución Política en casos similares.

Presentar Demanda de Inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

### **3. IMPACTO INTERNO**

Al realizar este trabajo acerca de la Demanda de Constitucionalidad del artículo 2 inciso 5 de la Ley de 592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del artículo 5 de la Ley 975 de 2005, se propone a estimular a los estudiantes a investigar y llenarse de conocimiento, pues a pesar que la Constitución Política nos brinda herramientas eficaces para luchar y hacer exigibles nuestro derechos, muchas veces no lo hacemos por desconocimiento o porque creemos que es muy difícil lograr el objetivo, lo vemos inalcanzable, esto como resultado de los hechos que ocurren a diario en nuestro país y que conocemos por medio de la prensa.

Teniendo en cuenta lo arriba señalado, debemos motivarnos a investigar los derechos de todos los ciudadanos y la manera de hacerlos una realidad en nuestras vidas y en todo aquel a quien podamos ayudar con nuestros conocimientos. Como ciudadanos que vivimos en un Estado Social de Derecho y a quienes se nos ha brindado mediante la Constitución Política de Colombia una oportunidad para lograr hacer respetar nuestros Derechos. Al estudiar las diferentes Sentencias emitidas por la Corte Constitucional nos damos cuenta que hemos evolucionado en materia de Derechos en nuestro país.

Mediante este proyecto se pretende que los estudiantes en primer lugar se animen a continuar el estudio de las Normas constantemente puesto que vemos que estas van cambiando, hay avance y a pesar que hay muchas Leyes acerca de un tema específico, la



Corte Constitucional cada día con sus pronunciamientos de acuerdo a cada situación en particular abre puertas para que a los ciudadanos no se les vulneren sus derechos. Al presentar esta Demanda también se demuestra que nos hemos estado preparando para aquello que nos espera en nuestra vida laboral donde pondremos en práctica lo aprendido, pero también debemos seguir con el estudio.

#### 4. ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD

*“La acción de inconstitucionalidad constituye un derecho político y ciudadano de aplicación inmediata y mediante ella la Corte Constitucional en su condición de guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Fundamental decide, con fuerza erga omnes, si el contenido material de las disposiciones demandadas se ajustan o no a la Lex Superior. “(C-708-2002)*

*“En orden a instituir la Constitución como primer fundamento del sistema jurídico colombiano, el artículo 4° de la Carta dispone que “la constitución es norma de normas” y que en caso de que exista “incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales. La consecuencia obvia al principio de que la ley debe estar subordinada a la Constitución y, por tanto, a que su contenido material se encuentre acorde con el texto superior, es, precisamente, el establecimiento de mecanismos de control que permitan garantizar la operancia de ese fundamento de Estado -la supralegalidad de la Constitución frente al derecho interno-“ ( C-562-00).*

*“El proceso de constitucionalidad que se inicia a partir de la acción pública de inconstitucionalidad está dirigido a determinar si una norma específica y concreta dictada por el Legislador vulnera la Constitución. El proceso no puede versar sobre normas inexistentes o deducidas por los demandantes, a partir de sus propias interpretaciones sobre una norma concreta. Ciertamente, toda norma puede ser vista en relación con un*

*sinnúmero de casos hipotéticos, que pueden ser comparados – a través de la acusación sobre la vulneración del principio de igualdad – con un espectro amplio de situaciones que se pueden también ser conectadas con la norma. Pero en los procesos de constitucionalidad, el papel de la Corte Constitucional no es el de resolver todas las dudas que pueden surgir sobre la interpretación de una norma. En estos procesos se trata es de establecer si existe una contradicción real y concreta entre lo establecido por una norma legal materialmente existente y la Constitución.” Sentencia C-1052-04*

Por antonomasia la historia del control de Constitucionalidad, de un estado corresponde a la crónica sobre la conformación de sus instituciones políticas. En Colombia, el análisis histórico de sus sistemas de control constitucional debe ser realizado partiendo de los albores de la república, pues en el texto de sus primeras constituciones, en particular la Constitución de Cundinamarca, promulgada en el palacio poder Ejecutivo de Santafé, el cuatro de abril (4) de 1811, establecía en su artículo 9°:

Habrá un senado de censura y protección, compuesto de un presidente, que lo será el vicepresidente de la representación nacional, y cuatro miembros, para sostener esta Constitución y los derechos del pueblo, a fin de que de oficio o requerido por cualquiera ciudadano, reclame cualquiera infracción o usurpación de todos o cada uno de los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial que sea contra el tenor de la constitución.

Este texto desarrolla la institución de control de constitucionalidad, mediante la acción pública ejercida por cualquier ciudadano, como lo indica la norma transcrita.

Esta facultad que se le otorga al ciudadano para que pueda demandar un acto por inconstitucional, buscando su exclusión del ordenamiento jurídico, tiene fundamento en la necesidad colectiva y el interés común, por defender la vigencia, integridad y supremacía de la constitución política.

Según Tobo (2005), en la constitución política de 1886 mediante el acto legislativo No 3 de 1910, el cual fue elaborado por una asamblea constituyente, conformada por destacados miembros del partido conservador y del partido liberal, quienes se unen en un movimiento que se conoció como el republicanismo, con el objeto de restaurar el orden, interferido durante el gobierno del general Reyes. Uno de los logros principales de esa reforma fue la adopción, del principio de la supremacía de la constitución, el cual estaba reconocido desde mucho antes, en nuestra propia tradición jurídica y en la de otras naciones civilizadas. Si bien lo que ocurrió en esa reforma no fue algo inédito, esta si aporta un sistema de control constitucional singular y propio, que un merecido desarrollo de los sistemas anteriores y que constituye un importante aporte al constitucionalismo americano, e incluso al constitucionalismo mundial; este sistema está conformado por dos mecanismos de control: la acción pública de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad.

Antes de la constitución política de 1991, era la Corte Suprema quien tenía la guarda de la integridad de la constitución Política, facultad esta que le fue otorgada mediante acto legislativo No 3 de 1910, es decir no había un órgano jurisdiccional exclusivo para los asuntos constitucionales, es por esto que una de las innovaciones de la

constitución de 1991, es la creación de la jurisdicción constitucional y a la cabeza de ella, la Corte Constitucional a la vez que amplía el campo de control jurisdiccional sobre la Carta, la corte constitucional fue creada el 7 de julio de 1991, como un organismo perteneciente a la rama judicial del poder público y se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la carta política, sus funciones se encuentran descritas en el artículo 241 de la constitución, una de las cuales consiste en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformativos de la constitución; resolver sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución;

*..El artículo 241 de la Carta Política le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos que éste prescribe. Para dar cumplimiento a tales propósitos, la norma le asigna a la Corte, entre otras funciones, la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y decretos con fuerza ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación (numerales 4° y 5°).*

Para Pombo (2003) la Corte, como cabeza de la jurisdicción constitucional, conoce de manera exclusiva de los asuntos de constitucionalidad cuyo análisis le confía la Carta Política y establece, en su condición de intérprete autorizado, las reglas jurisprudenciales sobre el alcance de las normas contenidas en la Constitución.

Según lo dispuesto en el artículo 239 de la Constitución y el artículo 44 de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.

Se observa entonces que la carta política de 1991 amplió el marco jurídico propio de la acción pública de inconstitucionalidad, toda vez que a partir del preámbulo dispone que los fines de la organización social se deben buscar dentro de un ámbito democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. En el mismo sentido el artículo 3 del estatuto superior señala que el pueblo ejerce la soberanía, en los términos que la constitución establece.

Younes (1992), afirma que: “por tanto la potestad política reconocida a todas las personas para actuar, en defensa del estado de derecho, se encuentra desarrollado en el artículo 40 de la carta, según el cual: “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para hacer efectivo este derecho puede:

(.....)

6- Interponer acciones públicas en defensa de la constitución y de la ley”

Esta acción de inconstitucionalidad conferida únicamente a las personas que tengan la calidad de ciudadanos, razón por la cual se considera acción pública, además de tener en cuenta que ella se ejerce en interés de todos, interés que no es otro que el de la guarda de la integridad del orden jurídico, en el cual descansa el orden y seguridad jurídica de los individuos. En este contexto queda claro que la acción de inconstitucionalidad, no puede ser ejercida por extranjeros, ni por las personas jurídicas, al respecto la corte ha expresado,

atreves de la sala unitaria lo siguiente, en auto de 10 de abril de 1992, del magistrado Ciro Angarita Barón:

“Que conforme a los artículos 40 y 241 de la Constitución Política, la interposición de acciones públicas en defensa de la misma, es un derecho predicable de todo ciudadano y no de las personas jurídicas puesto que por razones obvias, esta no puede ostentar tal calidad... que por lo anterior, el inciso final del decreto 2067 de 1991, según el cual: En caso de que la demanda sea presentada a petición de una persona natural o jurídica, el demandante deberá indicarlo en la demanda, debe interpretarse en consonancia con la norma del Estatuto Supremo arriba citadas”. Younes (1992).

En consecuencia, dicho precepto ha de ser entendido en el sentido de que quien formule la demanda debe actuar en su condición de ciudadano y no como apoderado o representante de una persona Jurídica...

*“La calidad de ciudadano en ejercicio constituye un requisito sustancial para convertirse en sujeto activo de la acción pública de inconstitucionalidad, de manera que la Corte no podría emitir pronunciamiento de fondo respecto de aquellos preceptos legales que han sido demandados, si quienes formulan la acusación no demuestran tener esa condición. En realidad, tal como se advierte de los mandatos contenidos en los artículos 40 y 241 de la Carta, la capacidad jurídica para iniciar y concluir válidamente al juicio de inconstitucionalidad la tiene únicamente quien acredite estar en ejercicio de la ciudadanía, hecho que, además, sólo se logra cuando el escrito acusatorio es presentado*

*personalmente ante el funcionario público competente que pueda dar fe del hecho.”*

*.\_Sentencia C-562-00.*

En este sentido los ciudadanos pueden acudir directamente ante la corte constitucional, para demandar las leyes, tanto por su contenido material, como vicios de procedimiento en su formación, para esto cualquier ciudadano puede acudir ante la corte constitucional, este derecho se encuentra consagrado en varias disposiciones de la carta.

La acción pública de inconstitucionalidad le brinda la oportunidad a cualquier ciudadano de cuestionar la ley y al hacerlo de colaborar en la misión de garantizar la supremacía de la constitución.

La Finalidad de la Acción Publica de inconstitucionalidad la define la Corte Constitucional diciendo que: *“El fin de la acción de inconstitucionalidad no es el de garantizar los intereses de grupos particulares, sino el de “guardar la integridad y supremacía de la Constitución”. Precisamente por eso es que el artículo 40 de la Carta contempla que todos los ciudadanos tienen el derecho de instaurar “acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley”, como una forma de participar en el “ejercicio y control del poder político.” En la acción pública de inconstitucionalidad debe predominar el interés público de defensa del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no puede aceptarse que sea utilizada con el interés principal de obtener beneficios particulares. Lo que la acción persigue, entonces, es la defensa del orden jurídico establecido en la Constitución y*



*para eso le confiere a todos los ciudadanos el poder de demandar ante la Corte Constitucional las leyes que consideran vulneratorias de la voluntad expresada por el Poder Constituyente al dictar la Constitución.” Sentencia C-1052 -2004.*

Conforme a los artículos 241 de la Constitución Política y 43 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y con tal fin, cumplirá la función de “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.

Por su parte, el Decreto Legislativo 2067 de 1991 establece el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional.

No obstante la Acción Publica de Inconstitucionalidad o Demanda de Inconstitucionalidad debe cumplir con un mínimo de requisitos, los cuales en diversos pronunciamientos la Corte ha expuesto de manera clara cuales deben ser estos.

Hecha la observación anterior es preciso citar la sentencia C-865/04.

*“ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargas mínimas/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Formulación de un cargo concreto de naturaleza constitucional.*

*De manera reiterada la Corte ha establecido que aun cuando la acción de inconstitucionalidad es pública e informal, los demandantes tienen unas cargas mínimas que deben cumplir para que se pueda adelantar el juicio de exequibilidad. Precisamente, esta Corporación ha insistido en que dichos requisitos deben ser cumplidos tanto formales como materialmente, por lo cual es obligación del ciudadano formular un cargo concreto de naturaleza constitucional contra la disposición acusada.” (Sentencia C-865/04.)*

En este mismo contexto señalo:

*“En reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001 que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991).*

*El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución. El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las*

*razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan ’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.*

*Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de manera específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales.*

*Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. La competencia, en fin, alude a que es la Corte Constitucional quien debe conocer del asunto sometido a su juicio, por cuanto el objeto demandado así lo determina de conformidad con lo previsto en el artículo 241 de la Constitución. Por lo demás, el lleno de todos estos requisitos, es condición para que, dado el caso excepcional que se enunció en el numeral anterior, pueda la Corte Constitucional integrar la unidad normativa. Pues la ocurrencia de las precisas y excepcionales circunstancias que permiten extender el examen de constitucionalidad a normas no acusadas, requieren en todo caso que se presente una demanda en forma en contra de un texto legal.” Sentencia C-914-10*

Con referencia a lo anterior, hace énfasis en que la demanda debe contener los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Para ilustrar esto en sentencia C-243/12, reiteró de forma clara los requisitos mínimos que deben cumplir los ciudadanos que instauren demandas de inconstitucionalidad.

*Así como el objeto de esta y explica a qué se refiere éste:*

*“El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y*

*permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo es contrario a la Constitución.”*

“..Las razones en que sustenta la demanda deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. 1. La claridad de la demanda se predica de aquella que tiene una coherencia argumentativa tal que le permita a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque debido al carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de forma coherente y comprensible. 2. La certeza de las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad, tiene que ver con que los cargos se dirijan contra una proposición normativa “real y existente”. Esto es, que esté efectivamente contenida en la disposición acusada y no sea inferida por el demandante, implícita o construida a partir de normas que no fueron objeto de demanda. La certeza exige que la norma que se acusa tenga un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto. 3. El requisito de especificidad hace referencia a que la demanda contenga al menos un cargo concreto contra las normas demandadas. En este orden de ideas, se oponen a la especificidad los argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”. Los argumentos expuestos por el demandante deben establecer una oposición objetiva entre el contenido del texto que se acusa y las disposiciones de la Constitución Política. 4. La pertinencia de los argumentos de la

demanda de inconstitucionalidad está relacionada con que el reproche formulado por el peticionario sea de naturaleza constitucional, y no fundado solamente en consideraciones legales y doctrinarias.

Por ello, son impertinentes los cargos que se sustenten en la interpretación subjetiva de las normas acusadas a partir de su aplicación en un problema particular y concreto, o en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras. 5. Por último, la suficiencia se predica de las razones que guardan relación, por una parte, “con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche” y, por otra parte, con el alcance persuasivo de los argumentos de la demanda que, “aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

Igualmente mediante sentencia - A280/08, la corte expreso:

*“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. De lo contrario, la Corte terminara inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la corte constitucional.” Sentencia A280/08. (Negrillas extra texto.)*

Al mismo tiempo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, el pleno de la Corte, al momento de proferir sentencia, se encuentra habilitado para establecer, como cuestión previa, si la demanda que da lugar al proceso de constitucionalidad fue presentada en legal forma, esto es, si cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad ha señalado al respecto:

*“Que la oportunidad inicialmente prevista para definir si la demanda se ajusta a los requerimientos de ley, es la etapa de admisión, a través del respectivo auto admisorio (Decreto 2067 de 1991, art. 6°). Sin embargo, la misma jurisprudencia ha precisado que ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acusación, adelantada únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, que no compromete ni limita la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5). Así, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso, la Corte está habilitada para realizar un nuevo análisis de procedibilidad de la demanda en la sentencia, por ser ella la llamada a decidir, con carácter definitivo e inmutable, si hay o no lugar a proferir sentencia de mérito (Decreto 2067 de 1991, art. 6°). Ese nuevo estudio de procedibilidad lo lleva a cabo la Corporación “con el apoyo de mayores elementos de juicio, pues para entonces, además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio”.*

En este orden de ideas la corte adelanta un estudio de procedibilidad para determinar de qué tipo será la sentencia que emitirá en cuando al caso en estudio, sentencias que pueden ser de dos tipos, implícito o explícito, para explicar estas me permito citar la sentencia c-418 de 2012.

*“El estudio de procedibilidad que adelanta la Corte en la sentencia puede ser de dos tipos: (i) implícito, cuando a primera vista se advierte sobre la conducencia de la demanda y la misma no presenta resistencia entre los distintos intervinientes, caso en el cual se entiende que la Corporación mantiene la decisión adoptada en el Auto Admisorio; o (ii) explícito, si la demanda formulada genera dudas acerca de su pertinencia, y así lo han advertido los intervinientes o la propia Corporación, debiendo proceder esta última a hacer un pronunciamiento expreso sobre el tema. De esta manera, aun cuando una demanda haya sido previamente admitida por el Magistrado Ponente, tal hecho no desvirtúa la atribución reconocida a la Corte para definir nuevamente en la sentencia si aquella se ajusta o no a los requisitos de procedibilidad, pues dicho aspecto se enmarca dentro del ámbito de competencia de la Corporación para proferir o no una decisión de fondo.”*

Adicionalmente al cumplimiento de estos requisitos, cuando la Acción de inconstitucionalidad contra la norma demandada verse sobre la posible vulneración del principio de igualdad esta debe satisfacer unos requisitos específicos, los cuales al igual que los anteriores la corte en diferentes pronunciamientos los ha fundamentado. Un ejemplo de esto es lo encontramos en sentencia C-102/11, en la que señalo:



*“La Corte, en abundante y reiterada jurisprudencia, ha establecido que las demandas que giran en torno a la posible vulneración del principio de igualdad deben cumplir unos ciertos requisitos, adicionales a los genéricos de toda demanda de inconstitucionalidad. Así, por ejemplo, se ha dicho que la demanda “debe suministrar un principio mínimo o indicativo de respuesta a tres preguntas básicas indispensables para garantizar un debate racional en sede judicial de constitucionalidad: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio?”; que “no es suficiente afirmar que existe un trato diferenciado sino que es ineludible, para estructurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad, que el actor precise cuáles son los grupos, regímenes jurídicos o situaciones que se comparan, la diferencia de trato establecida en las normas demandadas y las razones por las cuales considera que se debió dar un tratamiento diferente al grupo presuntamente afectado.”; y que “por la naturaleza relacional del juicio de igualdad, es necesario que se precise con claridad, suficiencia, pertinencia, especificidad y certeza cuáles son los sujetos cuyo cotejo se propone, cuál es el criterio de comparación escogido y cuáles son las razones por las que se acudió al mismo. De igual manera, si se tiene en cuenta que la correcta interpretación del principio de igualdad no supone la prohibición de la diferencia sino el reproche a la discriminación, al demandante no sólo corresponde presentar argumentos para demostrar que la ley estableció el trato diferente a dos supuestos fácticos iguales, sino que dicho trato no tiene una justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice”.*

Resulta entonces que la acción Pública de inconstitucionalidad a pesar de no exigir unos requisitos formales de presentación, requiere de unos requisitos mínimos para poder ser admitida por la Corte Constitucional.

Cabe decir que las sentencias o fallos que dictadas por la corte constitucional en el ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa Juzgada, por tanto ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexecutable por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. (Artículo 243 de la Constitución Política.).

Para mayor comprensión es conveniente enunciar el artículo 48 de la ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia,

#### **ARTICULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL.**

Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutive. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad

judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general.

2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

<http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/ley270%20-%2043a49.php>

Con base a lo anterior se reafirma la supremacía constitucional, garantizada por la corte constitucional en ejercicio de sus funciones de control de constitucionalidad.

Este concepto de supremacía de la carta es definido por la Corte así:

*“El concepto de supremacía normativa de la Carta Política es definitorio del Estado Social y constitucional de Derecho. En virtud de la fuerza normativa de la Constitución, las autoridades no solo se hallan sometidas al derecho positivo presidido por la norma superior, en el ejercicio de sus competencias; también para la realización efectiva de los derechos subjetivos consagrados constitucionalmente, ante dichas autoridades pueden los ciudadanos exigir la realización efectiva de los derechos constitucionales, algunos de los cuales son de “aplicación inmediata” -al tenor del artículo 85 constitucional-, merced, precisamente, a su fuerza normativa vinculante. De este modo, la supremacía normativa de las normas constitucionales se erige en un principio clave para la concreción del catálogo de derechos fundamentales y la efectividad de los demás derechos consagrados en la Carta Fundamental.” Sentencia C-415/12.*

De forma similar puede anotarse lo siguiente:

*“La noción de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución Política indica: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Sentencia C-415/12.*

Referentemente la corte Constitucional también se ha pronunciado respecto a la omisión legislativa, como es el caso que nos compete y por el cual se demandó la norma, manifestando que *“la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y la supremacía de la Constitución y en virtud de su competencia para ejercer el control abstracto de constitucionalidad de las leyes, puede juzgar tanto las acciones como las omisiones en las que incurre el legislador y que significan un desconocimiento de los mandatos constitucionales”*. En cuanto a las omisiones absoluta y relativa, la jurisprudencia constitucional ha reconocido competencia solo para pronunciarse sobre el segundo tipo. Esta última empero, reclama del ciudadano demandante unas cargas de argumentación más exigentes, pues como se ha dicho reiteradamente, *“cuando de activar el control de constitucionalidad abstracto por vía de acción se trata, aduciendo la existencia de una omisión legislativa relativa, es menester que el ciudadano demuestre con razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, que la norma acusada*

*contiene una omisión legislativa relativa de conformidad con el artículo 2º numerales 3 y 5 del Decreto 2067 de 1991” Sentencia C-914 -10.*

Paralelamente establece los requisitos requeridos para que haya omisión relativa en una norma por parte del legislador:

*“La jurisprudencia desde tiempo atrás ha señalado que la **omisión legislativa relativa** reclama que se hayan acreditado los siguientes presupuestos “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.”*

*..... “El ejercicio del derecho político a presentar demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa impone al ciudadano una fuerte carga de argumentación. Con él no se restringe su derecho a participar en la defensa de la supremacía de la Constitución, ‘sino que por el contrario, hace eficaz el diálogo entre el ciudadano, las autoridades estatales*

*comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior. El objetivo de tales exigencias en la argumentación, no es otro que garantizar la autorrestricción judicial y un debate constitucional en el que el demandante y no el juez sea quien defina el ámbito del control constitucional. Sentencia C-914 -10.*

A partir del control constitucional que hace la corte constitucional desde su creación ha emitido 941 pronunciamientos respecto al derecho a la igualdad.

#### **4.1 NORMA QUE SE DEMANDÓ**

La ley 1592 del 03 de Diciembre del 2012, es producto de una reforma realizada a la ley 975 de 2005 que enmarca por objeto, facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, a la vez garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, los cuales constituyen los pilares donde se cimenta la ley de Justicia y Paz, es decir la ley 975 de 2005.

Significa esto, que está busca llegar a la Verdad, teniendo en cuenta que es un derecho colectivo para la sociedad y un derecho particular para los familiares de las víctimas, a la Justicia, mediante la participación en las audiencias penales tanto en la fase

de instrucción como de juzgamiento y a la Reparación que conlleva la restitución plena, la indemnización, rehabilitación, reparación, simbólica, colectiva e individual.

Esta ley, está sustentada en un fundamento político criminal, que consiste en otorgar beneficios a quien se desmovilice, deje de delinquir y confiese los delitos, hincada en la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido hace tantos años, delitos cometidos por grupos armados que han sido archivados, de los que se desconocen quien o quienes, fue el autor material e incluso en algunos casos no se tiene conocimiento si la víctima está viva o muerta.

Por tanto esta ley busca no dejar en total impunidad, delitos tan graves como lo son masacres, desaparición forzada, homicidio, violación, entre otras.

Esta es una ley especial que se denomina justicia rogada, cuya base está en la confesión por parte de quienes cometieron los delitos o quienes dieron las órdenes, que no sigue los mismos derroteros de la justicia común, en la cual en la mayoría de los casos, el autor del delito no confiesa y busca ocultar las pruebas.

Por tratarse de delitos que violan los derechos Humanos, se cuenta con instrumentos internacionales que pueden intervenir cuando la legislación colombiana y las actuaciones de las autoridades no han sido eficientes, en la protección de los derechos humanos en cualquier circunstancia, o cuando se está en un conflicto armado interno.

En la actualidad y como es el caso estudiado esta ley sufrió una reforma, mediante la ley 1592 del 03 de diciembre del 2012, la cual establece nuevas disposiciones, en busca de brindar celeridad y eficacia a los procesos de justicia y paz, que actualmente están siendo conocidos a través de este mecanismo de justicia transicional, para así garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y la reparación y contribuir a la reconciliación nacional, articulando los esfuerzos del estado para la reparación efectiva de las víctimas del conflicto, otorgar coherencia e integralidad a la política de justicia Transicional adoptada por el estado colombiano, para hacer frente a un pasado de violaciones masivas a los derechos humanos, devolviendo la confianza en el estado.

Así mismo la Ley 1592 de 2012, modificatoria de la Ley 975 de 2005, define también quienes adquieren la calidad de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, para que con ello, estas puedan ser resarcidas de alguna manera en los daños sufridos, claro es, una vez hayan adquirido, desde la formalidad, la condición de víctimas, sin embargo en su artículo 2 inciso 5 que modifica el artículo 5 de la ley 975 del 2005, que es el que define la calidad de víctima, comete una omisión que vulnera derechos fundamentales protegidos por la constitución política.

A continuación transcribo y subrayo la norma acusada:

DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48633. 3, DICIEMBRE, 2012.



LEY 1592 DE 2012

(Diciembre 3)

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley. (subrayas y negrillas extra texto).

Tal como se observa el legislador excluye a los familiares de los miembros de la fuerza pública, con parentesco en primer grado civil, desconociendo los derechos que estos tienen, transgrediendo la normativa constitucional emanada del artículo 13 que establece la igualdad como un derecho de las personas y un principio para la actividad del estado.

La desigualdad denunciada es palmaria, dado que para los familiares de personas distintas a los miembros de la fuerza pública, entiéndase civiles, sí son amparados por la normatividad legal incluidos los familiares en primer grado civil. Esta exclusión del legislador, vulnera los derechos a los padres, madres adoptantes e hijos adoptivos de los miembros de la fuerza pública al no haber sido incluidos en la definición de víctimas que hizo el legislador en el artículo sub examine. Esta omisión constituye una grave afrenta para un grupo de personas que han sufrido daños en razón a las pérdidas de seres queridos que en cumplimiento del deber legal han entregado vidas y cuyos beneficiarios estarían en todo su justo derecho de hacer uso de un recurso judicial, a fin de lograr el amparo de sus derechos.

Del planteamiento antes expuesto, es de anotar que los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se constituye todo sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma puede estar en contradicción con los principios constitucionales, los derechos fundamentales, son como todas las normas constitucionales emanación de los valores y principios constitucionales (Sentencia T-406/92). En este orden de ideas, el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012,

modificatorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, infringe varias normas de rango constitucional, al excluir a un determinado grupo de ciudadanos en razón de su parentesco.

Es la situación clara de las personas con parentesco civil, respecto a los miembros de la Fuerza Pública, ya que al excluirse se provoca una vulneración no solo del Artículo 13 de la Constitución Política de 1991 que consagra el Derecho a la Igualdad, sino que también transgrede normas que por estar en el denominado Bloque de constitucionalidad se integran a nuestra Carta Política como es el Artículo II de la Declaración Americana de Bogotá, que proclama: “ Todas las Personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración sin distinción de raza , sexo, soberanía , credo ni otra alguna”, en el mismo sentido y por las mismas razones se vulnera, el Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José.

En ese mismo sentido el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificatorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, también resulta violatorio del Artículo 42 Inciso 4 De los Derechos y Deberes de la Familia, referido a la igualdad de los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, ya sean Adoptados o procreados Naturalmente o con asistencia científica, dice “tienen iguales Derechos y Deberes”.

El parentesco Civil lo define el Artículo 50 del Código Civil como aquel que “resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante y el adoptado se encuentran entre sí respectivamente, en las relaciones de padre, madre e hijo.”

Así las cosas, este parentesco, es una ficción legal por la cual se crea una relación entre adoptante y adoptivo, por ello, la Corte Constitucional ha emitido diversos pronunciamientos en defensa de esta institución, amparando el derecho a la igualdad y a la familia.

En este orden y teniendo en cuenta la importancia, de estos derechos, lo que se busca es demostrar ante la Corte Constitucional a través de la demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, la vulneración de los Artículos 13 y 42 de la Constitución Política de 1991, para que esta en sus funciones de órgano de control constitucional, declare la inexequibilidad, de la norma enunciada.

## **4.2 NORMAS QUE VULNERA EL ARTICULO 2 INCISO 5 DE LA LEY 1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 975 DE 2005.**

### **4.2.1 Definición del artículo 5 de la constitución política y su protección jurisprudencial**

## ARTICULO 5.

*La Constitución Política de Colombia: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”*

En este artículo se proclama el principio de la primacía de los derechos humanos, y el principio de la protección de la familia.

Quiere decir esto que la organización política estructurada como estado social de derecho, tiene el compromiso fundada, en la dignidad del ser humano, de brindar y proteger los derechos que materializan la condición de persona, estas garantías conocidas como derechos tienen el cometido de ayudar en la transcendencia o superación del ser humano. No son meras clausulas, ratifican la importancia de la condición humana. Por ello, los derechos están fuera del comercio, son intransferibles, y han de ser brindados en condiciones de igualdad a todo sujeto de la especie. Es una prioridad del estado.

*“Colombia es un Estado personalista fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º superior). La Constitución reconoce la primacía de los derechos inalienables del ser humano (artículo 5º superior). Se ha de proteger, entonces, el derecho a la vida, esto es, que la persona exista, además de garantizar cierta calidad de subsistencia (dignidad humana, artículo 1º superior). La persona es el sujeto, la razón de ser y fin último del poder político por lo que se constituye en norte inalterable en el ejercicio del poder y su relación con la sociedad. Es a partir del respeto por la vida humana que*

*adquiere sentido el desarrollo de la comunidad y el funcionamiento del Estado”*

*Sentencia. C-595-10.*

En el mismo sentido garantista, la normatividad superior colombiana toma a la familia como institución prima, la cual debe ser protegida, caracterizada no solo por la sumatoria de individuos que con lazos congénitos o civiles se asocian. Es una unión afectiva que involucra la búsqueda y realización de la felicidad para el ser humano. Así entendida la familia y los sujetos familiares ameritan garantías por parte de la sociedad y el Estado, ya que son seres de derechos y deberes, en esta última acepción el primer auxilio o socorro en circunstancias de dificultad las personas recurren a quienes conforman el círculo familiar, los que se ven afectados por las gracias y desgracias que le ocurra alguno de sus integrantes. Un ejemplo del anterior concepto de solidaridad, es la obligación reconocida por las disposiciones legales de dar alimentos a personas del entorno familiar. Bajo la anterior perspectiva los miembros del núcleo familiar son llamados a la unidad y el estado por mandamiento del artículo 5 de la Norma Superior, sabiamente redactado por la Asamblea Nacional Constituyente determina que no puede desconocerse la familia o sus individuos sean excluidos de derechos reconocidos.

***“La familia es la primera institución social, que concilia las exigencias de la naturaleza con los imperativos de la razón social. La familia es anterior a la sociedad y al Estado, entidades que están instituídas en primer lugar para servir al bienestar de la familia, del cual dependen las condiciones de la sociedad y del Estado. Nadie puede reemplazar a los padres en el cumplimiento del primer deber ante los hijos, deber que dicta antes el amor que la obligación.”*** Sentencia T-278-94.(Negrilla extra texto).

De igual forma ha dicho que *“Consciente de la importancia que para la sociedad y para el Estado entraña la institución familiar, el Constituyente de 1991 le ha dispensado un especial reconocimiento político y jurídico. A partir de la concepción personalista que inspiró la pretensión ideológica de reconocer a Colombia como un Estado social de derecho, en el que se propugna por el respeto, la protección y dignificación de la persona, la Carta del 91 le otorga a la institución familiar el carácter de piedra angular dentro de la organización política estatal, rescatando el criterio universal que la reconoce como elemento primordial de la sociedad y elevando a canon constitucional mandatos básicos de preservación, respeto y amparo que tienden a garantizar su existencia y pleno desarrollo, algunos de los cuales ya aparecían anunciados en leyes civiles o venían siendo objeto de análisis por la doctrina especializada y aplicados por la jurisprudencia nacional”*, Sentencia C-271/03

La norma acusada en la presente demanda viola el artículo 5to, de la Constitución Política de 1991, toda vez, que al omitirlos no reconoce derechos de reparación integral que como integrantes de la familia tienen los hijos adoptivos y padres adoptantes.

#### **4.2.2 definición del artículo 13 de la constitución política y su protección jurisprudencial**

*“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y*



*oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*Según la Constitución Política de Colombia de 1991, El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”.*

*“Para la Corte, el principio y derecho fundamental a la igualdad, considerado en sus múltiples manifestaciones, incluyendo la igualdad de oportunidades, la igualdad real y efectiva o las acciones afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados y de personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, representa la garantía más tangible del Estado Social de derecho para el individuo o para grupos de personas expuestos a sufrir un deterioro de sus condiciones de vida como sujetos de una sociedad democrática, donde todas las personas merecen la misma consideración y respeto en cuanto seres humanos.” Sentencia C-793-09.*

La igualdad es un principio constitucional, es decir, una regla de acción del estado y en un sistema caracterizado como Estado Social de Derecho, fundamenta el estado de derecho dándole la connotación de derecho fundamental permeando toda la praxis e

interpretación jurídica, política y determinada el origen y modelo del estado: El derecho se legitima como un orden que garantiza el paso de la igualdad formal a la igualdad material.

La transgresión al derecho de igualdad también puede tener lugar por defecto de las disposiciones legales, esto es, cuando el precepto general de la ley comprende a un número menor de individuos de los que debería y deja por fuera a determinados sujetos que merecían haber sido incluidos en ella. De esta manera se crean inequidades y tratamientos discriminatorios por omisión de las leyes que marginan a ciertos grupos o individuos, quienes recibirán un tratamiento diferente a los demás por la exclusión indebida que de ellos hace la ley.

No hay que olvidar que en el preámbulo de la Constitución Política se expone los fines principales que persigue. Entre estos se inviste la igualdad como unidad fundamental del orden jurídico que. Entre ellos se designa la igualdad como componente que instaura y busca garantizar un sistema Político, económico y social justo.

De acuerdo a la corte constitucional la declaración contenida en el preámbulo, respecto que este esquematiza los fundamentos, valores y principios en los que se afirman la constitución y que ella en su cuerpo normativo despliega, poder vinculante.

Razón está por la que ninguna autoridad podría contrariar los fines establecidos sin lesionar la constitución.

"Las autoridades" a las que hace referencia la norma son tanto los órganos de creación, Como los de aplicación del derecho. En el contexto, todos los órganos y sus titulares, en ejercicio de las funciones atribuidas disponen del poder público, y lo que la norma se Propone es impedir que éste se use de manera inequitativa e imparcial. En efecto, ninguna rama del poder público puede quedar sustraída de las obligaciones que se emanan de este derecho.

El principio de igualdad es uno de los aspectos más analizados por la jurisprudencia constitucional. *“Ese especial énfasis se explica en el lugar central que tiene ese principio para el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, pues el mandato de promoción de la igualdad de oportunidades y prohibición de discriminaciones injustificadas, son controles de primera índole para evitar el ejercicio desbordado del poder político que ejercen las instituciones del Estado, a la vez que conforman presupuesto necesario para el goce efectivo de los derechos constitucionales. Habida cuenta que existe una doctrina constitucional consolidada sobre la materia, la Corte en esta oportunidad hará una breve referencia a las reglas jurisprudenciales que (i) determinan el alcance de ese derecho; y (ii) fijan la metodología para el control de constitucionalidad de normas que se acusan por violar el principio de igualdad. La igualdad toma el doble carácter de derecho y de principio. Ello significa que es tanto una garantía constitucional a favor de las personas respecto de actuaciones estatales o de los particulares que resulten discriminatorias e injustificadas, como un mandato superior que obliga a que los mismos sujetos dirijan sus acciones de manera que satisfagan en la mayor medida posible, un trato igualitario desde una perspectiva material. Esta naturaleza compleja se explica a partir de*

*las diversas facetas en que se expresa la igualdad. Como lo ha señalado la Corte, del artículo 13 C.P. se colige la existencia de contenidos normativos que ordenan (i) la igualdad ante la ley, comprendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, previsión que dispone que las actuaciones del Estado y los particulares no deban, prima facie, prodigar tratos desiguales a partir de criterios definidos como “sospechosos” y referidos a razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; y (iii) un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, comprendido como el deber de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a los grupos discriminados y marginados, bien sea a través de cambios políticos a prestaciones concretas. A este mandato se integra la cláusula constitucional de promoción de la igualdad, que impone al Estado el deber de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, al igual que sancionar los abusos que contra ellas se cometan.” Sentencia C-221-11.*

En consecuencia el Estado colombiano a través del Congreso de la República no puede excluir a un grupo de personas, en razón de su parentesco, dado que crea una desigualdad, en cuanto a la calidad de víctima, sobre todo sí, la norma demandada, define la calidad de víctimas, ello crea un contrasentido considerando que el estado social de derecho definido en nuestra Carta Política está sustentado en el respeto a la dignidad humana, máxime en referencia a la persona que ha sido objeto de violaciones en su condición de titular de derechos y garantías protegidas por el derecho internacional

humanitario, los derechos humanos y normas constitucionales aplicables en el contexto del conflicto armado interno.

La Ley 1592 de 2012, modificatoria de la Ley 975 de 2005, busca la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, definiendo en la norma acusada quienes adquieren la calidad de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, para que con ello, estas puedan ser resarcidas de alguna manera en los daños sufridos, claro es, una vez hayan adquirido, desde la formalidad, la condición de víctimas.

Sin embargo, en el inciso 5 del artículo 2 la mencionada disposición, define quienes son víctimas respecto a los miembros de la fuerza pública, precisando que: “ así mismo se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de los actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.(...) “ observamos que el legislador excluye a los familiares de los miembros de la fuerza pública, con parentesco en primer grado civil, desconociendo los derechos que estos tienen, transgrediendo la normativa constitucional emanada del artículo 13 que establece la igualdad como un derecho de las personas y un principio para la actividad del estado.

La desigualdad denunciada es palmaria, dado que para los familiares de personas distintas a los miembros de la fuerza pública, entiéndase civiles, sí son amparados por la normatividad legal incluidos los familiares en primer grado civil. A juicio del accionante, esta exclusión del legislador, vulnera los derechos a los padres, madres adoptantes e hijos adoptivos de los miembros de la fuerza pública al no haber sido incluidos en la definición de víctimas que hizo el legislador en el artículo sub examine. Esta omisión constituye una grave afrenta para un grupo de personas que han sufrido daños en razón a las pérdidas de seres queridos que en cumplimiento del deber legal han entregado vidas y cuyos beneficiarios estarían en todo su justo derecho de hacer uso de un recurso judicial, a fin de lograr el amparo de sus derechos.

Empero, es restrictivo considerar como víctimas solo al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, deviene en inconstitucional por ser violatorio del derecho de igualdad del artículo 13 de la carta que señala “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.. (...)”,.” (Subrayado y negrillas fuera del texto). En este contexto, el aparte de la ley demandada, incurre en una clara discriminación con respecto a los familiares con parentesco de primer grado civil de los miembros de la fuerza pública, desconociendo el imperativo constitucional, de igualdad frente al trato que deben recibir por parte de la autoridad, excluyéndole la posibilidad de reclamar sus derechos, en

este caso discriminando por razón de su parentesco que nada tiene que ver con su calidad de víctimas.

Es de recordar que la Corte Constitucional ha establecido el contenido del derecho de igualdad se estructura a partir de la conjunción de seis elementos básicos:

*1. El principio general que nos enseña que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.*

*2. La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones, elemento que pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica.*

*3. El deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas.*

*4. La posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.*

*5. Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y*

*6. La sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En definitiva, para la Corte Constitucional el derecho de igualdad Implica: El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de*

*lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas éstas que en justicia deben ser relevantes para el derecho.* (Sentencia T-432 de junio 25 de 1992).

Se consagra la igualdad de derechos entre ellos sin importar si fueron concebidos en matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica.

Resulta contraria a la Constitución una ley como la acusada que trata de manera desigual a las personas que están en la misma situación de vulnerabilidad y hacen parte del mismo núcleo social aparado constitucionalmente como lo es la familia. Así las cosas, una norma se torna discriminatoria cuando tanto su contenido normativo como su ámbito de aplicación no se ajustan a la Constitución, y esa discriminación surge como consecuencia de un exceso o un defecto en las previsiones que conforman la ley.

Es indispensable resaltar la existencia por así decirlo de cláusulas específicas de igualdad, referida a la equiparación que se aplican en materia de especial relevancia constitucional. De la misma manera el artículo 19 de la Constitución Política, consagra la igualdad entre las confesiones religiosas y las iglesias. El artículo 42 de la Constitución Política, dispone que las Relaciones Familiares se basen en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en respeto recíproco entre todos sus miembros, la misma norma



determina la igualdad jurídica entre los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica. Correlativamente el artículo 43 de la constitución política reitera la igualdad del hombre y la mujer. De manera semejante el artículo 53 de la constitución, enumera entre los principios mínimos fundamentales del estatuto de trabajo, la igualdad de oportunidades para los trabajadores.

Es de anotar que la igualdad o desigualdad, no es un atributo de una persona, objeto o situación. La igualdad o desigualdad es la deducción de un juicio que se elabora en relación con una pluralidad de personas, objetos o situaciones que se confrontan entre sí.

Sin embargo la confrontación, no se puede hacer sin establecer anticipadamente un aspecto, rasgo, factor, característica o causa relevante, desde el punto de vista de quien la efectúa y para los efectos de la misma.

Los compendios, personas, objetos y situaciones, que se examinan, se denominan, “términos de comparación” este juicio de comparación o punto de vista que se elige, para realizar el cotejo, se define como “Tertium Comparationis”, entendido como criterio de comparación o valoración, dicho criterio lo determina el legislador en cada disposición, de acuerdo a la objetivo que persigue cumplir, la cual, a su vez, se deriva de la consecuencia Jurídica que se estipula a los receptores de la Norma.

En tanto el arte del legislador debería estar encaminada en armonizar perfectamente la finalidad de la Norma, el discernimiento de diferenciación que acoge, el trato que

concede y los destinatarios. Este es un ideal que difícilmente se logra en la práctica, trayendo consigo la necesidad de incrementar la intensidad del control constitucional de la igualdad, que hipotéticamente podría aplicar a todas las actuaciones legislativas.

Los conflictos de la igualdad, en la ley y en la aplicación de ésta, los cuales se vislumbran en el instante en que una determinada actuación estatal es expuesta a un análisis constitucional por este concepto.

Respecto a lo anterior podemos señalar los más frecuentes:

1. Ineptitud total o parcial del Criterio de Diferenciación, en analogía con el objeto.

La pérdida del fin legítimo de la norma, por este origen, puede llevar a la anómala integración de la población destinataria de ella. Resultado de esto, el criterio de diferenciación puede, excluir personas e incluir personas en clasificaciones, de categorías o clases de una manera errónea.

Según la Revista de Derecho Público de Eduardo Cifuentes Muñoz, en síntesis, las clasificaciones, categorías o clases resultantes, pueden de forma gradual pecar por exceso-incluyen más de la cuenta, o por defecto excluyen más de la cuenta.

2. El trato inadecuado. Referido este al trato o consecuencia jurídica, que se integra en el mandato de la norma, el cual puede ser idóneo para alcanzar la finalidad trazada o

siendo idóneo resulta excesivo, respecto a la restricción de derechos o la afectación de criterios de diferenciación, básicos aplicables a otros bienes. Así mismo cuando el trato es idóneo, la restricción que comparta, por innecesaria, resulte en una restricción indebida de los derechos y la libertad. Como resultado de lo expuesto puede decirse que de acuerdo a este concepto de trato inadecuado se comprenden diversas hipótesis de desconexión o hiato entre tanto y la finalidad de la norma:

(i) Hiato de racionalidad (carencia de relación lógica entre el trato y el fin); (ii) hiato de eficacia (defecto de idoneidad del trato para alcanzar el fin); (iii) hiato de proporcionalidad (balance neto negativo de los pros y contras jurídicos y materiales del trato). Tal como ocurre con la ineptitud del "criterio de diferenciación", los defectos imputables al trato, admiten diversos grados, lo que así mismo se predicaría del juicio de control de este elemento.

3. Según la Revista de Derecho, Eduardo Cifuentes, Criterio de Valoración y su relación con el trato. Es viable que entre los dos se dé un hiato de racionalidad, pero también una ruptura de la equidad, lo que sobreviene cuando ciertas relaciones se pretenden dirigir de acuerdo a ciertos patrones, contradictorio a la requerida por su propia naturaleza. En este contexto, gracias a la indiscriminada aplicación de algunos criterios de valoración a ámbitos distintos regidos por otros que le son contradictorios, se aprecia un aumento obsesivo y perjudicial de determinados valores sociales en detrimento de los demás. En Michael Walzer, hace un análisis en cuanto a las esferas de la justicia, dirigiéndolo justamente a esta orientación.

Con el transcurrir del tiempo y en la medida que este tema se acrecienta, la jurisprudencia constitucional se verá aún más obligada a configurar una doctrina sobre los criterios de distribución afines y no afines con el igual goce de los derechos constitucionales.

En diversos pronunciamientos la Honorable Corte ha reiterado el principio de igualdad como:

***“PRINCIPIO DE IGUALDAD-*** *Regla de justicia elemental que se proyecta para definir la forma de Estado /DERECHO A LA IGUALDAD- Derecho subjetivo que se concreta en la prohibición de discriminación.”*

*“La norma reconoce la igualdad ante la ley a todas las personas, consagra ante las autoridades los derechos a la igualdad de protección y a la igualdad de trato, y reconoce a toda persona el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación con base en criterios de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

***“PRINCIPIO DE IGUALDAD-Dimensiones diferentes/IGUALDAD ANTE LA LEY-*** *Alcance y forma de desconocimiento/IGUALDAD DE TRATO-Alcance y forma de desconocimiento/IGUALDAD DE PROTECCION-Alcance y forma de*

*desconocimiento/IGUALDAD DE PROTECCION-Es sustantiva/IGUALDAD DE PROTECCION-Determinación de violación*

*Se trata de tres dimensiones diferentes del principio de igualdad. La primera de ellas es la igualdad ante la ley, en virtud la cual la ley debe ser aplicada de la misma forma a todas las personas. Este derecho se desconoce cuándo una ley se aplica de forma diferente a una o a varias personas con relación al resto de ellas. Esta dimensión del principio de igualdad garantiza que la ley se aplique por igual, pero no que la ley en sí misma trate igual a todas las personas. Para ello se requiere la segunda dimensión, la igualdad de trato. En este caso se garantiza a todas las personas que la ley que se va a aplicar no regule de forma diferente la situación de personas que deberían ser tratadas igual, o lo contrario, que regule de forma igual la situación de personas que deben ser tratadas diferente. La ley desconoce esta dimensión cuando las diferencias de trato que establece no son razonables. Ahora bien, ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato garantizan que ésta proteja por igual a todas las personas. Una ley, que no imponga diferencias en el trato y se aplique por igual a todos, puede sin embargo proteger de forma diferente a las personas. La igualdad de protección consagrada en la Constitución de 1991 asegura, efectivamente, “gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades” (art. 13). Esta dimensión del principio de igualdad, por tanto, es sustantiva y positiva. Es sustantiva porque parte de la situación en que se encuentran los grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual.*

*Es positiva porque en caso de presentarse una desigualdad injustificada en razones objetivas relativas al goce efectivo de derechos, lo que procede es asegurar que el Estado adopte acciones para garantizar la igual protección. Para saber si esta dimensión del derecho a la igualdad ha sido violada es preciso constatar el grado efectivo de protección recibida a los derechos, libertades y oportunidades, y en caso de existir desigualdades, establecer si se han adoptado medidas para superar ese estado de cosas y cumplir así el mandato de la Carta Política. No basta con saber si el derecho se aplicó de forma diferente en dos casos en los que se ha debido aplicar igual o si el derecho en sí mismo establece diferencias no razonables, se requiere determinar si la protección brindada por las leyes es igual para quienes necesitan la misma protección.” Sentencia C-507-2004.(Subraya fuera de texto).*

Paralelamente ha dicho: “La Constitución concibe la igualdad como un principio y un derecho. Como principio, implica un deber de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y, en especial, para el legislador cuando configura el derecho y fija las directrices necesarias para estructurar las políticas públicas porque es una regla de justicia elemental y se proyecta para definir la forma de Estado. Como derecho, la igualdad es un derecho subjetivo que se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la discriminación y en obligaciones de acción como la consagración de tratos favorables para grupos que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles. Es claro que la Constitución no prohíbe el trato

*desigual sino el trato discriminatorio porque de hecho el trato distinto puede ser obligatorio para ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece diferencias sin justificación constitucionalmente válida. El principio a la igualdad y el derecho subjetivo a la no discriminación, entendidos éstos conceptos desde una perspectiva material que implica el trato igual o diferente pero no discriminatorio...”. C-862-08.*

En este mismo sentido ha manifestado *“El derecho a la igualdad prohíbe cualquier diferenciación injustificada, originada en razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otros criterios. Además, establece la obligación a cargo del Estado de adelantar acciones afirmativas a favor de grupos históricamente marginados y excluidos de la sociedad”.*

De igual Forma el Honorable Tribunal ha establecido un modelo de Juicio para la Igualdad de acuerdo al grado de intensidad, a continuación me permito enunciar:

***“JUICIO DE IGUALDAD-Modalidades según grado de intensidad/ CONTROL DEL CONSTITUCIONALIDAD Y JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad***

*En su jurisprudencia, la Corte ha sostenido que el control de constitucionalidad en general, y el juicio de igualdad en particular, adoptan diversas modalidades – leve, intermedio o estricto – según su grado de intensidad. En jurisprudencia más reciente la Corte ha reiterado la tesis según la cual la intensidad del control de constitucionalidad y*

*del juicio de igualdad varía dependiendo de la materia objeto de la norma demandada y sus implicaciones, si bien en todo caso es necesario examinar las circunstancias concretas que configuran cada situación para determinar el nivel de intensidad del juicio al que ha de ser sometida una norma que es objeto de control de constitucionalidad.*

### ***JUICIO DE IGUALDAD-Pasos***

#### ***JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad leve***

*El juicio leve basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y con que el medio escogido sea adecuado para el fin propuesto. Esta intensidad del juicio es aplicada, en principio, para examinar la constitucionalidad de medidas legislativas en materias económicas, tributarias o de política internacional. También se utiliza regularmente para aquellos casos en los que está de por medio una competencia específica que ha sido asignada constitucionalmente a un órgano constitucional, cuando se trata de analizar una norma preconstitucional que ha sido derogada pero aún surte efectos en el presente, o cuando del contexto normativo del artículo demandado no aparece prima facie una amenaza para el derecho en cuestión.*

#### ***JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad intermedia***

*El juicio intermedio se ha aplicado por la Corte para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, cuando, por ejemplo, la medida puede afectar el goce de un*



*derecho constitucional no fundamental o cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia. El juicio intermedio entraña que el examen de la norma sea más exigente. Así, en estos casos se requiere no solamente que el fin de la medida sea legítimo, sino que también sea importante, por cuanto promueve intereses públicos reconocidos por la Constitución o responde a problemas cuya magnitud exige respuestas por parte del Estado. Además, en este nivel del juicio de igualdad es preciso que el medio no sea solamente adecuado, sino que sea efectivamente conducente apara alcanzar el fin que se persigue con la norma que es objeto del análisis de constitucionalidad.*

#### ***JUICIO DE IGUALDAD-Intensidad estricta***

*Cuando el análisis de constitucionalidad de la medida se realiza aplicando un juicio de igualdad estricto, el fin de la disposición, además de ser legítimo e importante, debe ser imperioso. El medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, es decir, no puede ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el juicio estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones que ella implica sobre otros principios y valores constitucionales.*

**JUICIO DE IGUALDAD-Procedencia de intensidad estricta**

*La jurisprudencia ha precisado que el juicio estricto de igualdad procede, en principio: 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa, tal como ocurre con aquellas que están basadas en las categorías prohibidas para hacer diferenciaciones que están relacionadas en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida afecta fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas; 3) cuando aparece prima facie que la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental; y 4) cuando la medida que es examinada es creadora de un privilegio.” Sentencia C-227-04.*

A manera de Conclusión es preciso citar uno de los apartes de la sentencia C-818 de 2010, en los que la Corte Constitucional realiza un breve resumen de todo el contenido que encierra el principio y derecho fundamental a la igualdad:

*“La igualdad cumple un triple papel en nuestro ordenamiento constitucional por tratarse simultáneamente de un valor, de un principio y de un derecho fundamental. Este múltiple carácter se deriva de su consagración en preceptos de diferente densidad normativa que cumplen distintas funciones en nuestro ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el preámbulo constitucional establece entre los valores que pretende asegurar el nuevo orden constitucional la igualdad, mientras que por otra parte el artículo 13 de la*

*Carta ha sido considerado como la fuente del principio fundamental de igualdad y del derecho fundamental de igualdad. Adicionalmente existen otros mandatos de igualdad dispersos en el texto constitucional, que en su caso actúan como normas especiales que concretan la igualdad en ciertos ámbitos definidos por el Constituyente.*

*Otro aspecto de la igualdad que debe ser señalado en esta breve introducción es que carece de contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su carácter relacional. En efecto, como ha reconocido la jurisprudencia constitucional colombiana la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos que actúan como términos de comparación; por regla general un régimen jurídico no es discriminatorio considerado de manera aislada, sino en relación con otro régimen jurídico. Adicionalmente la comparación generalmente no tiene lugar respecto de todos los elementos que hacen parte de la regulación jurídica de una determinada situación sino únicamente respecto de aquellos aspectos que son relevantes teniendo en cuenta la finalidad de la diferenciación. Ello supone, por lo tanto, que la igualdad también constituye un concepto relativo, dos regímenes jurídicos no son iguales o diferentes entre sí en todos sus aspectos, sino respecto del o de los criterios empleados para la equiparación. Dicho carácter relacional es uno de los factores que explica la omnipresencia del principio de igualdad en la jurisprudencia de esta Corporación, pues hace posible que sea invocado*

*frente a cualquier actuación de los poderes públicos con independencia del ámbito material sobre el cual se proyecte. También influye en la interpretación del principio de igualdad porque, como ha señalado la doctrina, desde el punto de vista estructural éste necesariamente involucra no sólo el examen del precepto jurídico impugnado, sino que además la revisión de aquel respecto del cual se alega el trato diferenciado injustificado amén del propio principio de igualdad. Se trata por lo tanto de un juicio trimembre.*

*El control de constitucionalidad en estos casos no se reduce, entonces, a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que actúa como término de comparación. En consecuencia se entabla una relación internormativa que debe ser abordada utilizando herramientas metodológicas especiales tales como el test de igualdad, empleado por la jurisprudencia de esta Corporación. Ello a su vez determina que en numerosas oportunidades el resultado de control no sea la declaratoria de inexequibilidad de la disposición examinada, razón por las cuales los tribunales constitucionales han debido recurrir a distintas modalidades de sentencias con la finalidad de reparar la discriminación normativa. Ahora bien, la ausencia de un contenido material específico del principio de igualdad no significa que se trate de un precepto constitucional vacío, por el contrario, precisamente su carácter relacional acarrea una plurinormatividad que debe ser objeto de precisión conceptual. De ahí que a partir de la famosa formulación aristotélica de “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”, la doctrina y la jurisprudencia se han esforzado en precisar el alcance del principio general de igualdad –al menos en su acepción de igualdad de trato- del cual se desprenden dos normas que vinculan a los*

*podere públicos: por una parte un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente, del mismo modo el principio de igualdad también comprende un mandato de tratamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar entre situaciones diferentes.*

*Sin embargo, este segundo contenido no tiene un carácter tan estricto como el primero, sobre todo cuándo va dirigido al Legislador, pues en virtud de su reconocida libertad de configuración normativa, éste no se encuentra obligado a la creación de una multiplicidad de regímenes jurídicos atendiendo todas las diferencias, por el contrario se admite que con el objeto de simplificar las relaciones sociales ordene de manera similar situaciones de hecho diferentes siempre que no exista una razón suficiente que imponga la diferenciación. Esos dos contenidos iniciales del principio de igualdad pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Estos cuatro contenidos tienen sustento en el artículo 13 constitucional, pues mientras el inciso primero del citado precepto señala la igualdad de protección, de trato y en el goce de derechos, libertades y oportunidades, al igual que la prohibición de*

*discriminación; los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o especialmente vulnerables.*

*De los diversos contenidos del principio general de igualdad, surgen a su vez el derecho general de igualdad, cuya titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse en un supuesto fáctico especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que protege a sus titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los poderes públicos, el cual permite exigir no sólo no verse afectados por tratos diferentes que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios que no tengan en cuenta, por ejemplo, especiales mandatos de protección de origen constitucional”.*

#### **4.2.3 definición del artículo 42 de la constitución política y su protección jurisprudencial**

La Constitución Política de 1991, en su artículo 42 define la Familia como el núcleo fundamental de la sociedad, conminando al estado ejercer la debida protección sobre esta institución.

*“**ARTICULO 42.** La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.*

*El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.*

*La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.*

*Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.*

*Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.*

*Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.*

*La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.*

*Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.*

*Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.*

*Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.*

*También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.*

*De acuerdo a la Constitución de 1991, la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.*

*“La familia es una realidad sociológica que fue objeto de un reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991, en cuanto se la considera como el núcleo o sustrato básico de la sociedad. Esto implica, que ella sea objeto de una protección integral en la cual se encuentra comprometida la propia sociedad y el Estado, sin tomar en cuenta el origen o la forma que aquélla adopte, atendidos los diferentes intereses personales e instituciones sociales y jurídicas, a través de los cuales se manifiestan, desenvuelven y regulan las relaciones afectivas; por lo tanto, la Constitución aun cuando distingue no discrimina entre las diferentes clases de familia; todas ellas son objeto de idéntica protección jurídica sin que interese, por consiguiente, que la familia se encuentre constituida por vínculos jurídicos, esto es, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por vínculos naturales, es decir, por la voluntad responsable de conformarla.” Sentencia. C-289-00.*

*Como se expone el constituyente, reconociendo su deber de velar por la conservación de la familia, como unidad primaria y esencial de la convivencia humana, incorporo dentro*



del ordenamiento jurídico Constitucional de nuestro país, quedo definido a lo largo de varios artículos de la constitución de 1991, así:

*“(i) en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral.*

*En concordancia con ello, el artículo 42 de la Constitución consagró a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por*

*vínculos naturales o jurídicos, esto es, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. Ello permite advertir que en el orden constitucional vigente, no se reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Así, tanto la familia constituida por vínculos jurídicos, es decir, la que procede del matrimonio, como la familia que se constituye por vínculos naturales, es decir, la que se forma por fuera del matrimonio o en unión libre, se encuentran en el mismo plano de igualdad y son objeto de reconocimiento jurídico y político, de manera que las personas tienen plena libertad para optar por una u otra forma de constitución de la institución familiar.*

*La protección integral de que es objeto la institución familiar, cualquiera que sea la forma que ella adopte, es recogida y prodigada por la propia Constitución mediante la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer su importancia en el contexto del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines esenciales de la institución familiar, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Tal como lo ha destacado esta Corporación, ese ámbito de protección especial se manifiesta, entre otros aspectos, (i) en el reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la pareja y en respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y*

*obligaciones para los hijos, independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus derechos” Sentencia. C-821-05.*

Es de anotar que el concepto de familia ha sido dado por la corte en innumerables pronunciamientos entre los que encontramos el realizado en sentencia C-271-03. *“En un sentido amplio, la doctrina y la jurisprudencia han definido la familia como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos. Desde la perspectiva natural, la familia tiene su origen en la unión afectiva que surge entre un hombre y una mujer, mientras que como institución jurídica su fuente primaria es el matrimonio”.*

*“En el seno de la familia, hombre y mujer, en forma conjunta, asumen el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos que el orden natural y positivo les imponen, tanto por su condición de esposos como por su carácter de padres, y que se concretan en el debítum conyugal, la fidelidad, la convivencia, la asistencia y ayuda mutua, la solidaridad, la tolerancia y, en fin, la crianza, formación y educación de los hijos.*

### **FAMILIA**-Concepto sociológico

*A partir de su realidad sociológica, la familia antecede a la sociedad y al propio Estado que, precisamente, han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación, objetivos de los que “depende en gran medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad”.*

**FAMILIA**-Presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado

**FAMILIA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE**-Reconocimiento político y jurídico

*La Carta del 91 le otorga a la institución familiar el carácter de piedra angular dentro de la organización política estatal, rescatando el criterio universal que la reconoce como elemento primordial de la sociedad y elevando a canon constitucional mandatos básicos de preservación, respeto y amparo que tienden a garantizar su existencia y pleno desarrollo, algunos de los cuales ya aparecían anunciados en leyes civiles o venían siendo objeto de análisis por la doctrina especializada y aplicados por la jurisprudencia nacional.” Sentencia. C-271-03.*

En sus pronunciamientos en materia de familia la Corte Constitucional también ha explicado la importancia que tiene la familia y su amparo constitucional dentro del estado

social de derecho, inmerso en la constitución de 1991. En relación ha manifestado lo siguiente:

*“Respecto de la familia surgen para el Estado precisos cometidos de preservación y protección que se orientan a garantizar la existencia y el desarrollo de esta institución como básica de la sociedad. Y entre las potestades que el ordenamiento superior le asigna al Legislador está la de regular las formas de disolución del acuerdo matrimonial. De esta manera, habrá de entenderse que las potestades normativas que consagren el régimen legal matrimonial deben condicionarse, además de lo que en este aspecto prevé expresamente la Constitución, a la naturaleza y características que el ordenamiento superior asigna a la familia.” Sentencia C-660-00.*

*“El artículo 42 de la Constitución Política, establece que la familia constituye el núcleo esencial de la sociedad y reconoce que puede ser fundada por vínculos naturales o jurídicos, entre los que cuentan, la determinación de dos personas de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. Así, operó un cambio en relación con el régimen anterior que otorgaba solo especial protección a la familia surgida del vínculo matrimonial, así como a sus integrantes. De esta manera, la Constitución Política eliminó, de manera definitiva, cualquier distingo entre el matrimonio y la unión libre como formas de constitución de la familia, con fundamento en la protección que debe proporcionar el Estado a todas las formas de familia basándose en el principio de igualdad.” Sentencia T-522-11.*

La familia se consagra como institución base de la sociedad y sus individuos son reconocidos en conjunto e individualmente como sujetos de derechos.

Recordemos que el parentesco Civil lo define el Artículo 50 del Código Civil como aquel que “resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante y el adoptado se encuentran entre sí respectivamente, en las relaciones de padre, madre e hijo”, (subrayado fuera del texto) así mismo la Constitución Política de 1991 en su artículo 42 inciso 4to dice:

“Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.” (Subrayado fuera del texto)

En sentencia C-814 de 2001, la Corte Constitucional, define la Adopción, así como sus finalidades y los vínculos que se desprenden de ésta en relación con sus actores. LA adopción: *La adopción es el procedimiento que establece la relación legal de parentesco paterno o materno filial entre personas que biológicamente no lo tienen”*.

*Finalidad “Es, hoy en día, una institución concebida en beneficio del menor adoptable y para su protección. La adopción si bien permite que personas que no son padres o madres por naturaleza lleguen a serlo en virtud del parentesco civil, posibilitándoles a ellos el ejercicio de varios derechos como el conformar una familia, el del libre desarrollo de la personalidad, etc., no persigue prioritariamente este objetivo,*

*sino el de proteger al menor de la manera que mejor convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 de la Carta.”. Sentencia C-814-01.*

*Relación que surge.* *“En virtud de la adopción surge, con todas sus consecuencias, una relación jurídica de parentesco entre el adoptado y quien lo adopta y los parientes consanguíneos o adoptivos de este, conforme a lo dispuesto por el artículo 100 del Código del Menor, norma que guarda estrecha relación en este aspecto con lo dispuesto por el artículo 42 de la Carta Política que establece la igualdad de derechos y deberes de los hijos adoptivos con los habidos en el matrimonio o fuera de él, o con los procreados naturalmente o con asistencia científica.” Sentencia C-482-03.*

*“Las consecuencias inmediatas de la adopción, consisten en establecer la relación de padre o madre a hijo. Pero más allá de ello, es también una forma de incorporar al adoptivo a la familia del adoptante. En efecto, el adoptado entra a formar parte de tal familia, en cuanto la adopción establece el llamado parentesco civil, que se da no sólo en relación con quien adopta, sino también respecto de los parientes consanguíneos y adoptivos suyos. Desde este punto de vista, es decir en cuanto el adoptivo entra a formar parte de la familia del adoptante, la adopción satisface el derecho constitucional reconocido a todos los niños en el artículo 44 superior, de tener una familia y de no ser separado de ella, en aquellos casos en los cuales sus padres biológicos no pueden hacerse cargo de ellos. Y a través de la incorporación del adoptado a la familia del adoptante, se garantiza también todo el plexo de derechos reconocidos al menor de cuya eficacia el primer responsable es el padre. Por eso, la ley define la adopción como una “medida de protección” que se establece en favor del menor.” Sentencia C-814-01.*

Así mismo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-271/03:

*“La familia, en cuanto sujeto activo de derecho, encuentra un claro fundamento en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral.*

*En plena concordancia con lo anterior, de manera enfática y contundente el artículo 42 Superior se ocupa de calificar la familia como el “núcleo fundamental de la*



*sociedad”, aclarando que ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, que surge a través del matrimonio o de cualquier otra forma de unión entre dos personas de distinto sexo; lo cual permite establecer que el orden jurídico imperante no consagra privilegios en favor de un tipo determinado de familia, pues su objetivo es legitimar la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Bajo estos supuestos, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar la protección integral de la familia y de propugnar por el respeto a su dignidad, honra e intimidad, al tiempo que promueve la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes, considerando como destructiva de la armonía y unidad cualquier forma de violencia al interior de la institución familiar y en contra de sus integrantes.*

*Con criterio eminentemente garantista, y bajo la concepción de que la familia se forma tanto por vínculos jurídicos como naturales, dicho precepto coloca en un mismo plano de igualdad a los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, y a los adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, al reconocerles idéntico trato jurídico en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus deberes, dejando en cabeza de la pareja el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y la obligación de sostenerlos y educarlos mientras éstos sean menores o se encuentren impedidos.*

*Así entendido, de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional, el régimen impuesto por el constituyente de 1991 permite entrever su especial interés por el*

*reconocimiento y protección de la familia buscando, por una parte, “hacer de esta institución el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros” (Sentencia C-660 de 2000. MP. Alvaro Taffur Galvis).*

*Por la otra, procurando “un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus integrantes, aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones” (Sentencia C-660 de 2000. MP. Alvaro Taffur Galvis).*

*Es preciso aclarar que el fundamento de protección y garantía integral de la familia, a cargo del Estado y la sociedad, no comporta un objetivo aislado de nuestro orden jurídico interno apoyado en las disposiciones constitucionales en referencia. También el derecho internacional, a través de distintos instrumentos -declaraciones, pactos o convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales-, ha contribuido en forma decidida a afianzar su importancia y protagonismo en el contexto universal, precisamente, al referirse a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y asignarle a cada Estado y a la sociedad misma la responsabilidad de protegerla y asistirle ampliamente. Tal consideración aparece contenida, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos*

*Económicos, Sociales y Culturales (art. 10º) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (art. 17); instrumentos que, por lo demás, son de obligatoria observancia para Colombia al haber sido suscritos, aprobados y ratificados por sus distintos gobiernos”.*

Mediante sentencia T-523/92 la Corte Constitucional explico que “el Constituyente, acorde con la idea de un Estado que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, no reconoce ningún privilegio a un tipo específico de familia, sino que admite la diversidad de orígenes o vínculos que pueden originarla, sean naturales o jurídicos, es decir, tanto reconocimiento jurídico merece la familia que se forma por los lazos matrimoniales, como la que se constituye por las relaciones naturales, con lo cual se evidencia una aplicación concreta del principio de igualdad que cobija a las diferentes clases de familia que puedan conformarse...”

En el mismo sentido en torno a la igualdad de las familias se pronunció la Corte en la sentencia C-105/94<sup>1</sup>, en la cual dijo:

*“a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida "por vínculos naturales o jurídicos", es decir, a la que surge de la "voluntad responsable de conformarla" y a la que tiene su origen en el matrimonio”.*

---

<sup>1</sup> M.P. Jorge Arango Mejía

*“b) ‘El Estado y la Sociedad garantizan la protección integral de la familia’, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato”.*

*“c) Por lo mismo, “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”, sin tener en cuenta el origen de la misma familia”.*

*“d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio”.*

Como consecuencia de lo anterior, y en consonancia con el artículo 13 Superior, la Corte ha señalado que *“la igualdad que propugna la Carta entre las uniones familiares surgidas de vínculos naturales y la conformada por vínculos jurídicos, abarca no sólo al núcleo familiar como tal, sino también a cada uno de los miembros que lo componen, puesto que estas disposiciones guardan íntima relación con el artículo 13 Superior, que prescribe: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica (..)” (Subraya la Corte). Sentencia C-1126-04.*

En lo que concierne a los hijos el inciso 6 del art. 42 consagra la igualdad de derechos, sin tener en cuenta si fueron habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica.

En efecto, si frente a la Constitución todas las familias y los hijos son iguales y merecen idéntica protección, no encuentra la Corte que exista una razón objetiva y válida que justifique el trato diferenciado, pues los bienes de los hijos, sin que importe su origen, merecen la misma protección.

En este orden de ideas la corte constitucional ha manifestado:

*“Los hijos adoptados “tienen iguales derechos y deberes” y la Corte ha acotado que, en atención a las formas de fundar la familia “los hijos pueden ser de tres clases, a las que se refiere el mismo canon constitucional: hijos matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos”, entre los cuales, por disponerlo así la Constitución, no puede haber diferencias de trato.”*

*Sentencia C-577-11.*

La norma acusada, es una grave omisión que recae sobre las personas ubicadas en el primer grado de parentesco civil provocando, según la Sentencia T-587 de 1998, *“La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura”*.

Cuando una disposición legal, como la acusada, debe cobijar en su contenido general y abstracto a determinados sujetos y no lo hace sin justificación constitucional alguna, aparece de forma evidente la vulneración al derecho de igualdad por defecto de la norma, es decir, la norma deviene en insuficiente, y esa falencia ocasiona que exista un trato discriminatorio en contra de aquellos que fueron indebidamente excluidos de la disposición legal. Los familiares con parentesco primero civil de los miembros de la fuerza pública, reciben un trato diferente sin que existan razones de carácter constitucional para que así sea, la omisión de la ley genera una transgresión del derecho de igualdad cuyo remedio demanda una actuación de la Corte más allá de la simple declaratoria de inconstitucionalidad, por cuanto, para que las condiciones de igualdad sean reales y efectivas, es necesario dar a la norma un alcance distinto al que ella en principio tiene, y de esta forma incluir bajo su protección a los sujetos injustamente marginados.

Con la norma acusada se omiten los parámetros establecidos por la Constitución Política que brindan protección preferente a la institución familiar y garantizan derechos a todos sus integrantes. Dicha situación de reconocer el primer grado de parentesco civil como núcleo familiar ha sido regulada por disposiciones legal y jurisprudencial de connotación especial.

## CONCLUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo presentar una, Acción Pública de Inconstitucionalidad de conformidad al Decreto 2067 de 1991. Con el fin de Demandar Parcialmente el Artículo 2, inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de diciembre de 2012., en la que se pretende demostrar que la enunciada norma transgrede los artículos 5, 13, 42 inciso 4to de la Constitución Política.

Para demostrar esto, inicialmente se realizó un análisis complejo de la norma demandada, en especial lo dispuesto en el artículo 2 inciso 5 de la 1592 del 03 de diciembre de 2012, modificadorio del artículo 5 de la Ley 975 de 2005, en la cual pudimos observar la palmaria vulneración del texto constitucional, sobre los artículos 5, referido al derecho inalienable de las personas y el amparo del estado a la Familia, 13 el derecho fundamental a la Igualdad, 42 inciso 4to derecho a la familia, amparados por la constitución política.

Se analizaron diferentes pronunciamientos de la corte constitucional, en razón del amparo de estos derechos, para finalmente presentar ante la corte constitucional la acción de inconstitucionalidad pertinente, teniendo en cuenta que sí la Constitución reconoce y ampara, la igualdad en la familia constituida por vínculos "naturales o jurídicos". La igualdad de derechos de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, establecida que fue elevada a norma constitucional, no le es permitido al legislador hacer ningún tipo de exclusión de las personas entrelazadas por vínculos de parentesco civil, ya desconoce

sus derechos fundamentales como miembros de una núcleo familiar constituido por vínculos jurídicos.

Al elaborar la demanda de inconstitucionalidad se expusieron todos los argumentos jurídicos con el objeto de conseguir que la Honorable corte constitucional declare parcialmente inexecutable o en su defecto module su interpretación, en aras de que los familiares con parentesco civil de los miembros de fuerza pública que resulten víctimas por ocasión del conflicto armado generado por los grupos al margen de la ley, puedan también ejercer sus derechos reclamación ante las autoridades respectivas.

Por consiguiente la acción de inconstitucionalidad instaurada, fue presentada ante la Secretaria General de la Corte Constitucional el día 27 de mayo de 2013, siendo está admitida el día 11 de Junio, publicada en el estado del 13 de junio del 2013, siendo asignado como magistrado ponente el Doctor JORGE IVAN PALACIO PALACIO, a la fecha aún la Corte Constitucional no ha dictado Sentencia de la misma.



## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo Restrepo, Delfín (1986). La Constitución Nacional y sus principales reformas. Bogotá: ESAP.

Ballen, Rafael. (1991) Constituyente y Constitución de 1991. Bogotá: Editorial Jurídica de Colombia.

Botero Marino, Catalina y Jaramillo Juan Fernando. (2005). El Conflicto de las Altas Cortes Colombianas en Torno a la Acción de Tutela. Bogotá.

Burgoa O Ignacio. (1997) Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos, Editorial Porrúa, México.

Cárdenas Gómez, Humberto. (1995). Seminario Internacional de Derecho Administrativo. Medellín.

Cepeda Espinoza, José Manuel. (2005). La Defensa Judicial de la Constitución, Bogotá

-----, José Manuel. (2005). La Constituyente por dentro, mitos y realidades. Bogotá: Imprenta Nacional, 1993.

-----, José Manuel. (1993). La Carta de Derechos, su interpretación y sus implicaciones. Bogotá: Editorial Temis.

Congreso de la Republica de Colombia. Constitución Política de 1991. Ed. Leyer. Bogotá, 2001. p. 2. 6.58.

Duverger, Maurice. (1998). Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Barcelona: Editorial Ariel.

Dworkin Ronald. 1985. Questioni di principio; Il Saggiatore, Milano 1985

Favoreau, Luis. (1994). Los Tribunales Constitucionales, Editorial Ariel, Madrid

Fernández Silva, Álvaro. (1999). El Control Jurisdiccional de la Administración en los Estados Centroamericanos. El caso de Costa Rica, Historia y Perspectivas de la Jurisdicción Administrativa en Francia y en América Latina. Bogotá: Editorial Temis,

Gaceta de la Corte Constitucional Colombiana, t. I, 1992 pág. 85.

Gaceta de la Corte Constitucional Colombiana, t. 4, pág. 17

Henao Hidrón, Javier. (2003). Derecho Procesal Constitucional. Bogotá: Editorial Temis.

-----, Javier. (1994). Panorama del Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Editorial Temis.

Henao Orozco Ruben Dario (2005). Tutela Contra Sentencias de las Altas Cortes o Choque de Vanidades IV Congreso Antioqueño de Derecho Procesal Medellín.

Martin Vida, María Ángeles. (2002). Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva. Madrid: Civitas.

Lleras De La Fuente, Carlos. (1992). Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, Producción Editorial, Bogotá.

Olano García, Hernán. (2006). Constitución Política Colombiana. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley Ltda.

Pérez Escobar, Jacobo. (2004). Derecho Constitucional Colombiano. Bogotá: Editorial Temis.

.

Quinche Ramírez Manuel F. (2001). Vías de Hecho. La Acción de Tutela Contra Providencias, Huella de la Ley, Bogotá.

Ramírez Gómez, José Fernando. (1999). Principios Constitucionales del Derecho Procesal Colombiano. Medellín: Señal Editora.

Rey Cantor, Ernesto y Rodríguez R., María Carolina. (1997). Acción de Cumplimiento y Derechos Humanos. Bogotá: Editorial Temis.

Rodríguez, Libardo. (1999). Derecho Administrativo General y Colombiano. Novena Edición. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1999.

-----, Estructura del Poder Público en Colombia. (2006). Bogotá: Editorial Temis S.A. Décima Edición.

Trejos Jaramillo, Augusto. (2001). Teoría de las Acciones Constitucionales. Ponencia en el VIII Encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Santa Marta.

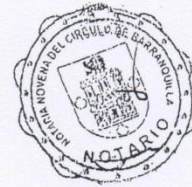
Tobo Rodríguez, Javier. (2012). La Corte Constitucional y el Control Constitucional en Colombia. Prologo Juan Manuel Santos Calderón- Presidente de la Republica.- Ed. Ibáñez. Cuarta Edición.

Villamil Portilla, Edgardo. (2006). La Seguridad Jurídica Bogotá.

Younes Moreno, Diego (2003). Curso de Derecho Administrativo. Ed. Temis. Octava Edición actualizada.

**ANEXOS**

Honorables  
MAGISTRADOS  
CORTE CONSTITUCIONAL  
Ciudad



hora 4:10 pm

*La familia es la primera institución social que concilia las exigencias de la naturaleza con los imperativos de la razón social. La familia es anterior a la sociedad y al Estado, entidades que están instituidas en primer lugar para servir al bienestar de la familia. Sentencia T-278/94.*  
M.P. Hernando Herrera Vergara

Ref.: Acción Pública de Inconstitucionalidad de conformidad al Decreto 2067 de 1991. Con el fin de Demandar Parcialmente el Artículo 2, inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de diciembre de 2012.

Yo, ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía número 22.645.906 de Soledad Atlántico, con domicilio en la ciudad de Barranquilla, en uso de mis derechos y deberes ciudadanos consagrados en los artículos 40 numeral 6° y 95 numeral 7° de la Constitución Política, me dirijo a ustedes para interponer Acción Pública y demandar en forma parcial por inconstitucionalidad el artículo 2 inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de diciembre de 2012, modificatorio del artículo 5 de la Ley 975 de 2005 publicada en el Diario Oficial 48633, en razón a que esta ley transgrede los artículos 5, 13, 42 inciso 4to de la Constitución Política.

Se demanda para que la Honorable Corte Constitucional declare inconstitucional, la parte subrayada en negrillas de la siguiente disposición:

#### 1. NORMA ACUSADA COMO INCONSTITUCIONAL

A continuación transcribo y subrayo la norma acusada:

DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48633. 3, DICIEMBRE, 2012.

LEY 1592 DE 2012  
(Diciembre 3)

Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así:

Artículo 5°. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.





La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.

*También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley. (subrayas y negrillas extra texto)*

## 2. NORMAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS

Las Normas Constitucionales vulneradas por la disposición demandada son:

### ARTICULO 5.

*El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.*

### ARTICULO 13.

*Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan."*

### ARTÍCULO 42.

*La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.*

*El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.*

*Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.*

*Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progeneritura responsable.*

*La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.*

*Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.*



3. RAZONES POR LAS CUALES LAS NORMAS CONSTITUCIONALES EXPRESADAS SE ESTIMAN VIOLADAS.

1974 NOV 21  
DE BARRANCO  
JENNY  
S. G. 104

NOTA: LA NOTA DE BARRA  
DEBEMOS

La norma acusada en la presente demanda viola el artículo 5to. de la Constitución Política de 1991, toda vez, que al omitirlos no reconoce derechos de reparación integral que como integrantes de la familia tienen los hijos adoptivos y padres adoptantes.

La igualdad es un principio constitucional, es decir, una regla de acción del estado y en un sistema caracterizado como Estado Social de Derecho, fundamenta el estado de derecho





Dándole la connotación de derecho fundamental permeando toda la praxis interpretación jurídica, política y determinada el origen y modelo del estado: El derecho se *legítima como un orden que garantiza el paso de la igualdad formal a la igualdad material.*

La transgresión al derecho de igualdad también puede tener lugar por defecto de las disposiciones legales, esto es, cuando el precepto general de la ley comprende a un número menor de individuos de los que debería y deja por fuera a determinados sujetos que merecían haber sido incluidos en ella. De esta manera se crean inequidades y tratamientos discriminatorios por omisión de las leyes que marginan a ciertos grupos o individuos, quienes recibirán un tratamiento diferente a los demás por la exclusión indebida que de ellos hace la ley.

El Estado colombiano a través del Congreso de la República no puede excluir a un grupo de personas, *en razón de su parentesco, dado que crea una desigualdad, en cuanto a la calidad de víctima*, sobre todo si, la norma demandada, define la calidad de víctimas, ello crea un contrasentido considerando que el estado social de derecho definido en nuestra Carta Política está sustentado en el respeto a la dignidad humana, máxime en referencia a la persona que ha sido objeto de violaciones en su condición de titular de derechos y garantías protegidas por el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y normas constitucionales aplicables en el contexto del conflicto armado interno.

La Ley 1592 de 2012, modificatoria de la Ley 975 de 2005, busca la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, definiendo en la norma acusada quienes adquieren la calidad de víctimas del conflicto armado interno en Colombia, para que con ello, estas puedan ser resarcidas de alguna manera en los daños sufridos, claro es, una vez hayan adquirido, desde la formalidad, la condición de víctimas.

Sin embargo, en el inciso 5 del artículo 2 la mencionada disposición, define quienes son víctimas respecto a los miembros de la fuerza pública, precisando que: " así mismo se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de los actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.(...) " observamos que el legislador excluye a los familiares de los miembros de la fuerza pública, con parentesco en primer grado civil, desconociendo los derechos que estos tienen, transgrediendo la normativa constitucional emanada del artículo 13 que establece la igualdad como un derecho de las personas y un principio para la actividad del estado.

La desigualdad denunciada es palmaria, dado que para los familiares de personas distintas a los miembros de la fuerza pública, entiéndase civiles, sí son amparados por la normatividad legal incluidos los familiares en primer grado civil. A juicio del accionante, esta exclusión del legislador, vulnera los derechos a los padres, madres adoptantes e hijos adoptivos de los miembros de la fuerza pública al no haber sido incluidos en la definición de víctimas que hizo el legislador en el artículo sub examine. Esta omisión constituye una grave afrenta para un grupo de personas que han sufrido daños en razón a las pérdidas de seres queridos que en cumplimiento del deber legal han entregado vidas y cuyos beneficiarios estarían en todo su justo derecho de hacer uso de un recurso judicial, a fin de lograr el amparo de sus derechos.

Sin embargo, es restrictivo considerar como víctimas solo al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, deviene en inconstitucional por ser violatorio del derecho de igualdad del artículo 13 de la carta que señala "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (...)". (Subrayado y negrillas fuera del texto). En este contexto, el aparte de la ley demandada, incurre en una clara discriminación con respecto a los familiares con parentesco de primer grado civil de los miembros de la fuerza pública, desconociendo el imperativo constitucional, de





igualdad frente al trato que deben recibir por parte de la autoridad, excluyéndolos de la posibilidad de reclamar sus derechos, en este caso discriminando por razón de parentesco que nada tiene que ver con su calidad de víctimas.

Es de recordar que la Corte Constitucional ha establecido el contenido del derecho de igualdad se estructura a partir de la conjunción de seis elementos básicos:

1. El principio general que nos enseña que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades.
2. La prohibición de establecer o consagrar discriminaciones, elemento que pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica.
3. El deber del Estado de promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas.
4. La posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados.
5. Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y
6. La sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. En definitiva, para la Corte Constitucional el derecho de igualdad implica: El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se sigue necesariamente que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas esas que en justicia deben ser relevantes para el derecho. (Sentencia T-432 de junio 25 de 1992).

Se consagra la igualdad de derechos entre ellos sin importar si fueron concebidos en matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica.

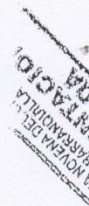
Resulta contraria a la Constitución una ley como la acusada que trata de manera desigual a las personas que están en la misma situación de vulnerabilidad y hacen parte del mismo núcleo social aparado constitucionalmente como lo es la familia. Así las cosas, una norma se torna discriminatoria cuando tanto su contenido normativo como su ámbito de aplicación no se ajustan a la Constitución, y esa discriminación surge como consecuencia de un exceso o un defecto en las previsiones que conforman la ley.

### 3.3. RESPECTO AL ARTÍCULO 42 DE LA C.P.

La familia se consagra como institución base de la sociedad y sus individuos son reconocidos en conjunto e individualmente como sujetos de derechos.

Recordemos que el parentesco Civil lo define el Artículo 50 del Código Civil como aquel que "resulta de la adopción mediante la cual la ley estima que el adoptante y el adoptado se encuentran entre sí respectivamente, en las relaciones de padre, madre e hijo", (subrayado fuera del texto) así mismo la Constitución Política de 1991 en su artículo 42 inciso 4to dice: "Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable." (Subrayado fuera del texto)

Así mismo ha reiterado la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-271/03 ha expresado: "La familia, en cuanto sujeto activo de derecho, encuentra un claro fundamento en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen







familiar no puede ser factor de discriminación; en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral.

En plena concordancia con lo anterior, de manera enfática y contundente el artículo 42 Superior se ocupa de calificar la familia como el "núcleo fundamental de la sociedad", aclarando que ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, que surge a través del matrimonio o de cualquier otra forma de unión entre dos personas de distinto sexo; lo cual permite establecer que el orden jurídico imperante no consagra privilegios en favor de un tipo determinado de familia, pues su objetivo es legitimar la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Bajo estos supuestos, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar la protección integral de la familia y de propugnar por el respeto a su dignidad, honra e intimidad, al tiempo que promueve la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes, considerando como destructiva de la armonía y unidad cualquier forma de violencia al interior de la institución familiar y en contra de sus integrantes.

Con criterio eminentemente garantista, y bajo la concepción de que la familia se forma tanto por vínculos jurídicos como naturales, dicho precepto coloca en un mismo plano de igualdad a los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, y a los adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, al reconocerles idéntico trato jurídico en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus deberes, dejando en cabeza de la pareja el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y la obligación de sostenerlos y educarlos mientras éstos sean menores o se encuentren impedidos.

Así entendido, de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional, el régimen impuesto por el constituyente de 1991 permite entrever su especial interés por el reconocimiento y protección de la familia buscando, por una parte, "hacer de esta institución el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros"<sup>1</sup>. Y por la otra, procurando "un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus integrantes, aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones"<sup>2</sup>.

3.3. Es preciso aclarar que el fundamento de protección y garantía integral de la familia, a cargo del Estado y la sociedad, no comporta un objetivo aislado de nuestro orden jurídico interno apoyado en las disposiciones constitucionales en referencia. También el derecho





internacional, a través de distintos instrumentos -declaraciones, pactos o convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales-, ha contribuido en forma decidida a afianzar su importancia y protagonismo en el contexto universal, precisamente, al referirse a la familia como "el elemento natural y fundamental de la sociedad" y asignarle a cada Estado y a la sociedad misma la responsabilidad de protegerla y asistirle ampliamente. Tal consideración aparece contenida, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica- (art. 17); instrumentos que, por lo demás, son de obligatoria observancia para Colombia al haber sido suscritos, aprobados y ratificados por sus distintos gobiernos".

La norma acusada, es una grave omisión que recae sobre las personas ubicadas en el primer grado de parentesco civil provocando, según la Sentencia T-587 de 1998, "La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura".

Cuando una disposición legal, como la acusada, debe cobijar en su contenido general y abstracto a determinados sujetos y no lo hace sin justificación constitucional alguna, aparece de forma evidente la vulneración al derecho de igualdad por defecto de la norma, es decir, la norma deviene en insuficiente, y esa falencia ocasiona que exista un trato discriminatorio en contra de aquellos que fueron indebidamente excluidos de la disposición legal. Los familiares con parentesco primero civil de los miembros de la fuerza pública, reciben un trato diferente sin que existan razones de carácter constitucional para que así sea, la omisión de la ley genera una transgresión del derecho de igualdad cuyo remedio demanda una actuación de la Corte más allá de la simple declaratoria de inconstitucionalidad, por cuanto, para que las condiciones de igualdad sean reales y efectivas, es necesario dar a la norma un alcance distinto al que ella en principio tiene, y de esta forma incluir bajo su protección a los sujetos injustamente marginados.

Con la norma acusada se omiten los parámetros establecidos por la Constitución Política que brindan protección preferente a la institución familiar y garantizan derechos a todos sus integrantes. Dicha situación de reconocer el primer grado de parentesco civil como núcleo familiar ha sido regulada por disposiciones legal y jurisprudencial de connotación especial.

En conclusión: Si la Constitución reconoce, la igualdad en la familia constituida por vínculos "naturales o jurídicos". La igualdad de derechos de los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, establecida fue elevada a norma constitucional, no le es permitido al legislador hacer ningún tipo de exclusión de las personas entrelazadas por vínculos de parentesco civil.

#### 4. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Conforme a los artículos 241 de la Constitución Política numeral 4 y demás normas concordantes en especial el Decreto Legislativo 2067 de 1991 que establece el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional. Son los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional, competentes para conocer y fallar sobre esta demanda.

RECEIVED  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
Y DE LA FALSA  
DE BARRANQUILLA  
10/03/2000



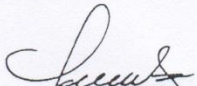
## 5. NOTIFICACIONES

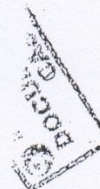
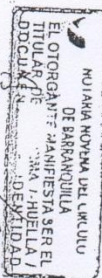
La suscrita accionante recibe notificaciones en la Carrera 54 No. 64-97 oficina 408 Edificio Centro Boulevard, Barrio El Prado. Teléfono 36867779-3158237156, en la ciudad de Barranquilla.

Correo electrónico: anapao\_1779@hotmail.com

De los Honorables Magistrados,

Con todo respeto,

  
ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS  
C.C. No 22.645.906 de Soledad- Atlántico.



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

Corte Constitucional  
Secretaría General

Oficio No. 1545

Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013).

Señora

**ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS**

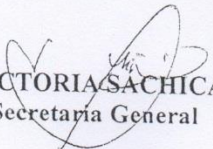
Carrera 54 No 64-97 oficina 406 Ed. Centro Boulevard  
Barrio El Prado Barranquilla - Atlántico

REFERENCIA: EXPEDIENTE D- 9689. LEY 1592 DE 2012, ARTICULO 2. INCISO 5  
(PARCIAL). MAGISTRADO FONENTE: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO

Respetada señora:

Comedidamente, dando cumplimiento a lo ordenado en el numeral sexto del  
auto del once (11) de junio de dos mil trece (2013), se le solicita que envíe  
copia de la demanda de la referencia al siguiente correo electrónico:  
[despacho05@corteconstitucional.gov.co](mailto:despacho05@corteconstitucional.gov.co)

Atentamente,

  
**MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ**  
Secretaría General

MVSM/Rlm/Jemr



REPÚBLICA DE COLOMBIA



Corte Constitucional

Secretaría General

JUNIO 13 DE 2013

PROCESOS DE CONSTITUCIONALIDAD

ESTADO N° 080

EXPEDIENTE	ASUNTO	FECHA AUTO	DECISIÓN
D-9689	LEY 1592 DE 2012, ARTICULO 2. INCISO 5 (PARCIAL)	11/06/2013	" <b>Primero.- ADMITIR</b> la demanda de inconstitucionalidad presentada por la ciudadana Ana Paola Díazgranados Iglesias demanda el artículo 2° (parcial) de la Ley 1592 de 2012, <i>"Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones."</i>

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

**ANEXO 1**  
**CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA  
CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN  
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO**

Barranquilla, Fecha

Marque con una X

Tesis ☐ Trabajo de Grado ☒

Yo ANA PAOLA DIAZGRANADOS IGLESIAS, identificado con C.C. No. 22.645.906 actuando en nombre propio y como autor de la tesis y/o trabajo de grado titulado ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2º INCISO 5º DE LA LEY 1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTICULO 5º DE LA LEY 975 DE 2005. presentado y aprobado en el año 2013 como requisito para optar al título de ABOGADO; hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en formato digital o electrónico (DVD) y autorizo a la UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.

Y autorizo a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad de la Costa, CUC, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página Web de la Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional y en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.

EL AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe.

Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo valor y tenor, en Barranquilla D.E.I.P., a los 12 días del mes de Noviembre de Dos Mil Trece 2013

**EL AUTOR - ESTUDIANTE.**\_\_\_\_\_

**FIRMA**



## ANEXO 2

### FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO:

ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 2º INCISO 5º DE LA LEY 1592 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2012, MODIFICATORIO DEL ARTICULO 5º DE LA LEY 975 DE 2005

SUBTÍTULO, SI LO TIENE:

---

#### AUTOR AUTORES

Apellidos Completos	Nombres Completos
DIAZGRANADOS IGLESIAS	ANA PAOLA

#### DIRECTOR (ES)

Apellidos Completos	Nombres Completos
HERRERA TAPIAS	BELINA

#### JURADO (S)

Apellidos Completos	Nombres Completos
VIRVIESCA PEÑA	EFRAIN
GUERRERO	WILMAN

#### ASESOR (ES) O CODIRECTOR

Apellidos Completos	Nombres Completos
JIMÉNEZ GONZALEZ	ROBERTO WILLIAM

**DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:** Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. *(En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Unidad de información en el correo biblioteca@cuc.edu.co, donde se les orientará).*

## ESPAÑOL

## INGLÉS

Acción Pública de Inconstitucionalidad

Public Action of unconstiutionality

Control Constitucional

Constitutional Control

Derechos fundamentales

Fundamental Rigths

**RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:**(Máximo 250 palabras-1530 caracteres):

En Colombia existen una serie de herramientas para dotar a los ciudadanos de mecanismos efectivos que permitan el amparo de sus derechos fundamentales, de igual forma le ofrece la posibilidad de interponer acción de inconstitucionalidad, de acuerdo al ordenamiento constitucional vigente, para que por medio de esta pueda ejercer la defensa de la supremacía de la constitución, cuando considere que una disposición contradice ésta. La acción pública de inconstitucionalidad es entonces una de las herramientas que irradian un insondable sentido democrático, participativo y deliberativo del orden constitucional vigente.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, esta investigación Jurídica estuvo en caminata en evaluar si el Artículo 2 Inciso 5 de la Ley 1592 del 03 de Diciembre de 2012, modificadorio del Artículo 5 de la Ley 975 de 2005, transgrede el derecho fundamental a la igualdad artículo 13 y los derechos y deberes de la familia artículo 42 inciso 4 de la Constitución Política y así poder ejercer el derecho constitucional de la acción pública de inconstitucionalidad a fin de lograr el amparo de la constitución como norma suprema.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se elaboró y posteriormente se presentó el día 27 de Mayo de 2013, ante la secretaria General de la Corte Constitucional, una demanda de Acción de Inconstitucionalidad, siendo esta admitida el día 11 de Junio y publicada en el estado No 080 del 13 de Junio de 2013, la cual aún se encuentra en estudio, para fallo.

## Abstract

In Colombia they exist a series of tools to endow the citizens of effective mechanisms that allow the help of their fundamental rights, of equal it forms him he/she offers the possibility to interpose unconstitutionality action, according to the effective constitutional classification, so that by means of this it can exercise the defense of the supremacy of the constitution, when it considers that a disposition contradicts this. The public action of unconstitutionality is then one of the tools that irradiate an unfathomable democratic sense, participativo and deliberative of the effective constitutional order.

According to the previously exposed thing, this Artificial investigation was in having walked in evaluating if the Article 2 Parenthesis 5 of the Law 1592 of December of 2012, 03 modificadorio of the Article 5 of the Law 975 of 2005, it transgresses the fundamental right to the equality I articulate 13 and the rights and duties of the family article 42 parenthesis 4 of the Political Constitution and this way to be able to exercise the constitutional right of the public action of unconstitutionality in order to achieve the help of the constitution like supreme norm.

To give execution to the proposed objectives, it was elaborated and later on the day it was presented May of 2013, 27 before the General secretary of the Constitutional Court, a demand of Action of Unconstitutionality, being this admitted the day June 11 and Not published in the state 080 of June of 2013, 13 which is still in study, for failure.